

Santiago de Cali, mayo de 2021.

Señores

JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO – Reparto -
Popayán.

Ref.: Medio de control	Reparación Directa
Demandante	Marisela Soto y otros
Demandado	Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
	Municipio de Miranda

HENRY BRYON IBÁÑEZ portador de la cédula de ciudadanía No. 16.588.459 de Cali, con Tarjeta Profesional de Abogado No. 68.873 del Consejo Superior de la Judicatura y **FERNANDO YEPES GÓMEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.417.378 de Cali y Tarjeta Profesional de Abogado No. 102.358 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderados judiciales de la parte demandante; de conformidad con los poderes conferidos, acudimos ante esta jurisdicción para impetrar medio de control - demanda de Reparación Directa en contra del **MUNICIPIO DE MIRANDA** y a la **NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL**; para que por los medios previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con citación y audiencia de la parte demandada y del agente del Ministerio Público, se declare su responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados a los demandantes, como consecuencia de las lesiones físicas y perturbaciones psicológicas/psiquiátricas sufridas, según los supuestos fácticos que se relatarán.

DESIGNACION DE LAS PARTES

1. **PARTE DEMANDANTE.** Está compuesta por:

GRUPO FAMILIAR UNO

- 1.1. **MARISELA SOTO**, identificada con cédula de ciudadanía número 31.627.151 de Florida, lesionada.
- 1.2. **JADER ALBEIRO GONZÁLEZ SOTO**, hijo de la lesionada, portador de la cédula de ciudadanía número 1.059.064.809 de Miranda.
- 1.3. **DIANA PAOLA GONZÁLEZ SOTO**, hija de la afectada, titular de la cédula de ciudadanía número 1.059.063.002 de Miranda.
- 1.4. **DANNA SOFÍA OSORIO GONZÁLEZ**, menor de edad, nacida el veinte (20) del mes de abril del año dos mil cuatro (2004), tarjeta de identidad No. 1.112.038.833 de Miranda, hija de Diana Paola González Soto y Wayner Osorio Patiño, nieta de la víctima.
- 1.5. **JUAN MANUEL CARRILLO GONZÁLEZ** menor de edad, nacido el día doce (12) del mes de mayo del año dos mil doce (2012), hijo de Diana Paola González Soto y Manuel Alejandro Carrillo Maya, nieto de la lesionada.
- 1.6. **CECILIA SOTO**, madre de la afectada, identificada con cédula de ciudadanía número 29.498.598 de Florida.
- 1.7. **MARÍA YANELY SOTO**, hermana de la lesionada, portadora de la cédula de ciudadanía número 25.531.217 de Miranda.
- 1.8. **JOHN BEIMAR SUÁREZ SOTO**, hermano de la afectada, titular de la cédula de ciudadanía número 10.346.558 de Miranda.
- 1.9. **JOHN JAIRO SUÁREZ SOTO**, hermano de la víctima, titular de la cédula de ciudadanía número 10.346.855 de Miranda.
- 1.10. **MELIDA SUÁREZ SOTO**, hermana de la lesionada, portadora de la cédula de ciudadanía número 25.529.077 de Miranda.

- 1.11. **NANCY SUÁREZ SOTO**, hermana de la afectada, identificada con cédula de ciudadanía número 25.529.405 de Miranda.

GRUPO FAMILIAR DOS

- 1.12. **JOSÉ RAÚL PARRA MURILLO**, lesionado, identificado con cédula de ciudadanía número 16.883.286 de Florida (Valle).
- 1.13. **LILIANA AGREDO CHICAIZA**, compañera permanente de la víctima, titular de la cédula de ciudadanía número 31.628.506 de Florida (Valle).
- 1.14. **KAREN JULIANA PARRA AGREDO**, hija del lesionado, portadora de la cédula de ciudadanía número 1.114.898.033 de Florida (Valle).
- 1.15. **LEIDY VIVIANA PARRA AGREDO**, hija del afectado, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.107.069.832 de Cali (Valle).

GRUPO FAMILIAR TRES

- 1.16. **CLAUDIA JOHANNA POSSO MEJÍA**, lesionada, portadora de la cédula de ciudadanía número 1.112.224.192 de Pradera (Valle).
- 1.17. **MELANY LICETH HURTADO POSSO**, menor de edad, nacida el treinta (30) del mes de marzo del año dos mil seis (2006), hija de Claudia Johanna Posso y Rodolfo Hurtado.
- 1.18. **HELEN DAYAN HURTADO POSSO**, menor de edad, nacida el diez (10) del mes de abril del año dos mil ocho (2008), hija de Claudia Johanna Posso y Rodolfo Hurtado.
- 1.19. **JHOAN RODOLFO HURTADO POSSO**, menor de edad, nacido el cinco (5) del mes de octubre del año dos mil nueve (2009), hijo de Claudia Johanna Posso y Rodolfo Hurtado.
- 1.20. **ELVIRA MEJÍA VENTE**, madre de la afectada, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.626.157 de Florida (Valle).

- 1.21. **RAQUEL POSSO MEJÍA**, hermana de la lesionada, portadora de la cédula de ciudadanía número 29.676.506 de Palmira (Valle).
- 1.22. **MARÍA DEL PILAR TORRES MEJÍA**, hermana de la víctima, titular de la cédula de ciudadanía número 1.059.067.288 de Miranda.
- 1.23. **MAYRA ALEJANDRA POSSO MEJÍA**, hermana de la afectada, portadora de la cédula de ciudadanía número 1.007.412.465 de Florida (Valle).

GRUPO FAMILIAR CUATRO

- 1.24. **SANDRA PATRICIA MAYA MARTÍNEZ**, afectada, identificada con cédula de ciudadanía número 25.389.834 de Padilla.
- 1.25. **DIANA CAROLINA MOSQUERA MAYA**, hija de la lesionada, portadora de la cédula de ciudadanía número 1.060.419.316 de Padilla.
- 1.26. **SARA MOSQUERA MAYA**, menor de edad, nacida el quince (15) del mes de julio del año dos mil siete (2007), hija de Sandra Patricia Maya y Cristian Mosquera Sánchez.
- 1.27. **OWEN ANDRÉS GIRÓN MAYA**, menor de edad, nacido el seis (6) del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), hijo de Sandra Patricia Maya y Jhon Bairo Girón Mina.

GRUPO FAMILIAR CINCO

- 1.28. **YEINSON ESTIVEN BAICUE MEZÚ**, lesionado, identificado con cédula de ciudadanía número 1.114.900.648 de Florida.
- 1.29. **YENNI MEZÚ MOSQUERA**, madre del afectado, titular de la cédula de ciudadanía número 25.530.541 de Miranda.
- 1.30. **ALEXANDER GONZÁLEZ RAMOS**, padre de crianza del lesionado, portador de la cédula de ciudadanía número 10.345.488 de Miranda.

- 1.31. **JHON ALEXANDER GONZÁLEZ MEZÚ**, menor de edad, nacido el dieciséis (16) del mes de diciembre del año dos mil seis (2006), hijo de Yenni Mezu Mosquera y Alexander González Ramos, hermano de la víctima.

PETICIÓN ESPECIAL

Atendiendo la ausencia de prueba del parentesco del reclamante **ALEXANDER GONZÁLEZ RAMOS** con los demás participantes, solicitamos al despacho de conocimiento se sirva tenerlo como **legítimo demandante**, y será nuestra obligación procesal en el devenir del litigio demostrar su legitimación para la reclamación.

GRUPO FAMILIAR SEIS

- 1.32. **SORAYDA CANDELO CAPOTE**, afectada, identificada con cédula de ciudadanía número 25.528.007 de Miranda.
- 1.33. **VIVIANA CAROLINA BARRIOS CANDELO**, hija de la víctima, portadora de la cédula de ciudadanía número 1.114.881.291 de Florida (Valle).
- 1.34. **KATHERIN PAOLA BARRIOS CANDELO**, hija de la lesionada, titular de la cédula de ciudadanía número 1.114.881.292 de Florida (Valle).
- 1.35. **KAREN ANDREA BARRIOS CANDELO**, hija de la afectada, identificada con cédula de ciudadanía número 25.531.500 de Miranda.
- 1.36. **MARÍA CAMILA CAMPUZANO BARRIOS** menor de edad, nieta de la víctima, nacida el quince (15) del mes de mayo del año dos mil siete (2007), hija de Karen Andrea Barrios Candelo e Ismael Campuzano Medina.
- 1.37. **WILMAR ALEXIS BARRIOS MURILLO**, hijo de crianza de la lesionada, portador de la cédula de ciudadanía número 10.347.584 de Miranda.
- 1.38. **AYDA MARIA CAPOTE**, madre de la víctima, identificada con cédula de ciudadanía número 25.526.691 de Miranda.

1.39. **JOAQUIN CAPOTE**, hermano de la afectada, titular de la cédula de ciudadanía número 4.711.835 de Miranda.

1.40. **TANIA PAMELA CAPOTE MUÑOZ**, sobrina de la víctima, identificada con cédula de ciudadanía número 1.151.958.421 de Cali.

PETICIÓN ESPECIAL

Atendiendo la ausencia de prueba del parentesco de los reclamantes **WILMAR ALEXIS BARRIOS MURILLO** y **TANIA PAMELA CAPOTE MUÑOZ** con los demás participantes, solicitamos al despacho de conocimiento se sirva tenerlos como **legítimos demandantes**, y será nuestra obligación procesal en el devenir del litigio demostrar su legitimación para la reclamación.

2. PARTE DEMANDADA. Corresponde a

2.1. **MUNICIPIO DE MIRANDA**, representado por el señor Alcalde Municipal o por quien haga sus veces al momento de la notificación.

2.2. **NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL**; representada legalmente por el señor Ministro de Defensa Diego Molano, o por quien haga sus veces al momento de la notificación, funcionario con sede en Bogotá.

3. **MINISTERIO PÚBLICO**. Representado por el señor Procurador Judicial delegado ante esta Jurisdicción.

PRETENSIONES

PRIMERA. Que se declare patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Municipio de Miranda por todos los perjuicios ocasionados a la parte demandante, a raíz de las lesiones físicas y perturbaciones psicológicas/psiquiátricas sufridas, con ocasión del atentado terrorista perpetrado contra las instalaciones de la alcaldía municipal, el día veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019).

SEGUNDA. Que como consecuencia obligada de la anterior declaración, se condene a las entidades demandadas a pagar las siguientes sumas de dinero:

PRIMER GRUPO FAMILIAR

1. PERJUICIOS MATERIALES.

Se hará bajo las siguientes modalidades:

1.1. **Lucro Cesante.** Su fundamento en el caso bajo examen se encuentra en la pérdida de capacidad laboral de la señora Marisela Soto como consecuencia de las lesiones físicas y perturbaciones psicológicas/siquiátricas causadas por el suceso que da origen a esta reclamación.

Para la liquidación de este perjuicio se tendrá en cuenta los siguientes factores:

- a. El porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, que podrá oscilar en un veinticinco por ciento (25%)¹, según las características de las afectaciones físicas y psicológicas sufridas por la lesionada Marisela Soto.
- b. Los ingresos promedio mensuales, es decir para los efectos el salario mínimo mensual vigente para la época de los hechos.
- c. El periodo de vida probable de la afectada, de conformidad con el documento de Proyecciones de Población expedido por el Departamento Nacional de Estadística de septiembre de 2007².

¹ Determinada por la respectiva Junta Regional de Calificación de Invalidez.

² La esperanza de vida al nacer para mujeres es de setenta y ocho (78) años.

- d. Los intereses compensatorios desde la fecha de su causación hasta cuando se produzca la indemnización.

La cifra arrojada será actualizada de conformidad con la aplicación de la siguiente fórmula:

$$VP = S \frac{\text{Índice Final}}{\text{Índice Inicial}}$$

Donde los factores equivalen a:

VP Valor Presente

S Suma que se busca actualizar

Índice final Índice de Precios al Consumidor a la fecha del incidente regulador.

Índice Inicial Índice de Precios al Consumidor a la fecha de causación del perjuicio.

La indemnización comprenderá dos períodos:

- a. **Vencido o consolidado**, que se establezca aplicando la fórmula:

$$S = \frac{Ra (1+i)^n - 1}{i}$$

Ra Renta mensual actualizada según la primera fórmula,

i Interés puro o técnico del 6 % mensual o 0.4867 mensual

n Período (número de meses) que comprende la indemnización, que va desde la fecha de ocurrencia del hecho, hasta aquella probable de ejecutoria del auto.

- b. **Futuro o anticipado**, que se halla mediante la fórmula:

$$S = \frac{Ra (1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

S Suma buscada

Ra Renta actualizada

i Interés 6%

n Número de meses a indemnizar (supervivencia).

De acuerdo con los factores mencionados inicialmente; podría tasarse aproximadamente este perjuicio en la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS m/cte. (\$70.000.000), o lo que resulte probado.

1.2. **Daño emergente.** Con motivo de las graves perturbaciones sufridas por Marisela Soto se ha hecho necesario asumir los gastos de ciertos medicamentos y tratamientos para la recuperación de su situación psicofísica, suma que asciende a diez millones de pesos (\$10.000.000), según documentos que se anexarán.

En forma subsidiaria solicitamos al señor Juez de conocimiento ordenar a las entidades el pago de este estipendio conforme la cuantía que se sirva determinar atendiendo los principios de equidad y de reparación integral, así como las pautas fijadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corporación Internacional que ha entendido bajo ciertas circunstancias³, que este perjuicio puede presumirse, y que no obstante no lograr probarse, la equidad surge como criterio para su estimación⁴.

Reiteramos, la regulación de la responsabilidad patrimonial en el ordenamiento jurídico patrio, consagra el postulado del resarcimiento íntegro de los perjuicios inferidos a otra persona. Así, el artículo 16 de la ley 446 de 1998 prevé que *"Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales"*.

En dicho sentido ha explicado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil⁵

[El juez tendrá que ordenar al demandado la restitutio in integrum a favor del damnificado, es decir que deberá poner al sujeto perjudicado en una situación lo más parecida posible a aquella en la que se encontraría de no haber ocurrido el daño. Por ello, una vez establecidos los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, el sentenciador tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto, esto es que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas en que tuvo lugar el daño, su intensidad, si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio]

³. Ver entre otras, Caso Niños de la Calle vs Guatemala, sentencia del 26 de mayo de 2001, núm. 79; Caso de la "Panel Blanca" vs Guatemala, 25 de mayo de 2001 núm. 116; Caso "El Caracazo vs. Venezuela", sentencia de 29 de agosto de 2002, núm. 50.

⁴. La jurisprudencia de la alta corporación de lo contencioso administrativo ha expuesto la necesidad de reparar integralmente a la víctima del daño causado por las entidades públicas, que obedece no sólo a la materialización del principio de "reparación integral" que nuestro ordenamiento ha incorporado, sino en respuesta a la influencia de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias al denominado "Bloque de constitucionalidad".

⁵ Sentencia de diciembre 18 de 2012, radicación número 2004-00172-01.

Y si bien es cierto, "...de conformidad con el principio de la necesidad de la prueba (art. 174 del C. de P. Civil), toda decisión judicial debe fundarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, el reconocimiento judicial de una pretensión que tenga como objeto la indemnización de un perjuicio, supone la demostración de todos y cada uno de los elementos que configuran la tutela jurídica de dicha pretensión, incluyendo, por supuesto, el daño, salvo aquellos eventos de presunción de culpa, de conformidad con la doctrina de la Corte, y la presunción de daños de acuerdo con la ley, como en los casos de los artículos 1599 y 1617 num. 2 del C. Civil. Sin embargo, una es la prueba del daño, o sea la de la lesión o menoscabo del interés jurídicamente tutelado, y otra, la prueba de su intensidad, del quantum del perjuicio. De ahí que la doctrina haga alusión al contenido patrimonial del daño para referirse a su intensidad, es decir, a su valor en moneda legal (dinero), como patrón de referencia para determinar la mensura, por cuanto considera que dada su simplicidad y universalidad, es el que más conviene al tráfico de las reparaciones, caso en el cual opera una reparación por equivalencia o propiamente indemnizatoria, por oposición a la reparación natural que implica 'volver las cosas al estado que tendrían si no hubiera ocurrido el hecho dañoso'"⁶

Así como lo insistido la máxima Corporación de la jurisdicción ordinaria civil⁷:

Es posible acudir a la equidad para determinar el monto del daño, en aquellos casos límite, en que, habiéndose acreditado el perjuicio patrimonial, la determinación de su cuantía se torna extremadamente difícil, no obstante, el cumplimiento de las cargas probatorias por la parte demandante. Al respecto se ha expresado que '[c]on referencia específica al invocado principio de la equidad, vale la pena recordar, además, con apego a numerosos contenidos doctrinarios, jurisprudenciales y, por supuesto, normativos, que no obstante las consecuencias inherentes al ejercicio de la delicada carga probatoria atrás aludida, hay casos en que sería injusto no concretar el valor de la indemnización so pretexto de que a pesar de estar demostrada la existencia del daño, su cuantificación no ha sido posible, pues ante esta circunstancia, el juez, además de estar impelido a usar las facultades oficiosas que en materia probatoria ponen a su alcance las normas procesales, ha de acceder a criterios de equidad que le impiden soslayar los derechos de las víctimas' (Cas. Civ. 5 de octubre de 2004. Exp. 6975)

2. PERJUICIOS INMATERIALES.

2.1. Perjuicios morales.

La tradicional concepción del daño moral se centra en el daño ocasionado al ámbito efectivo o sentimental de la persona, lo que trae como consecuencia, sufrimiento, dolor, perturbación espiritual⁸, situaciones, que como se demostrará; se evidenciaron tanto en la afectada, como en su entorno familiar.

⁶ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia de agosto 9 de 1999, radicación 4897.

⁷ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia de febrero de 2002, expediente 2002-01011-01.

⁸ FERNANDEZ SESSAREGO Carlos. El daño a la persona (Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 1995, págs. 71 y ss). Artículo compilado en el texto DEL DAÑO, José N. Duque Gómez. Editora

Atendiendo los principios de *Reparación Integral y Equidad* que señala el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, la valoración del perjuicio moral se tendrá en salarios mínimos legales mensuales, por lo cual se tasaré así:

- MARISELA SOTO, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

JADER ALBEIRO GONZÁLEZ SOTO, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

- CECILIA SOTO, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- JOHN JAIRO SUÁREZ SOTO, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- MELIDA SUÁREZ SOTO, cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- NANCY SUÁREZ SOTO, cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- JOHN BEIMAR SUÁREZ SOTO, cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- MARÍA YANELY SOTO, cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- DIANA PAOLA GONZÁLEZ SOTO, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- DANNA SOFIA OSORIO GONZÁLEZ, cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- JUAN MANUEL CARRILLO GONZÁLEZ, cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

2.2. Daño a la salud o fisiológico.

El Consejo de Estado en sentencia del día catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011), radicación número 05001-23-25-000-1994-00020-01(19031), actor: Antonio José Vigoya Giraldo y otros, adoptó una nueva tipología de los perjuicios inmateriales que durante años ha venido definiendo, acogiendo “el daño a la salud” como un nuevo concepto que además desplaza toda una clasificación que de los daños inmateriales diferentes al moral se construyó jurisprudencialmente durante años. Sostuvo la Corporación:

Entonces, como se aprecia, el daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no sólo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no patrimonial⁹. En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones.

En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica¹. Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.” (Resaltado fuera de texto)

Bajo estas consideraciones, tenemos un desmedro en su salud que generó afectaciones psico-físicas que deberán ser reparadas por las instituciones demandadas.

La tasación del presente perjuicio, se estima aproximadamente en ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva y a favor de Marisela Soto.

2.3. Daño del derecho a la recreación, al aprovechamiento del tiempo libre o derecho, bien e interés constitucional protegido.

El objetivo de la reparación es fundamentalmente devolver las cosas a su estado primitivo, *in natura*; no obstante, hay eventos que por su naturaleza impiden lograr ese tipo de reparación, de allí que surjan las indemnizaciones⁹ y las compensaciones¹⁰ como forma

⁹ Entendida como aquella “acción que se le otorga al acreedor o a la víctima para exigir de parte de su deudor o bien del causante de un daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese

reparatoria. No obstante, la reparación no puede traducirse en un beneficio para el perjudicado, es decir no puede ir más allá, o de percibir más de lo que perdiere como consecuencia del daño.

Si bien es cierto la jurisprudencia del Consejo de Estado ha realizado serios estudios que permitan estructurar una tipología adecuada de los daños inmateriales, construida sobre la base de los principios de reparación integral y el "no enriquecimiento sin causa", no ha sido del todo pacífica la discusión, aún más cuando el escenario ofrece un alto grado en la polémica pues vr. gr. la doctrina refiere multiplicidad de daños inmateriales; la evidente dualidad de conceptos en lo que atañe a la finalidad de la reparación, es decir si se indemniza el daño evento o la consecuencia del mismo. Sin embargo, encontramos que en el mismo sentido nuestro Consejo de Estado advierte, a pesar de categorizar los daños inmateriales en clases que no llamen a confusiones, el daño moral y daño a la salud; la viabilidad de encontrar otros daños inmateriales, atendiendo el interés y el derecho permeado por el evento antijurídico, aunque permitiéndolo únicamente en asuntos diferentes a las reclamaciones por lesiones psico-físicas. Sostuvo

*Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) **cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de "daño corporal o afectación a la integridad psicofísica" y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación** ¹¹.*

Sin embargo, pese la posición de la Alta Corporación, debemos resaltar que el daño a la salud, no obstante, envuelve el daño-evento y el daño-consecuencia, su capacidad reparatoria no abarca el menoscabo de otro tipo de intereses y derechos amenazados o quebrantados, que no hacen parte de la consecuencia de la lesión psico-física.

reportado el cumplimiento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación instaurada entre las partes o la reparación del mal causado a la víctima". Fuente Wikipedia.

10 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, puede significar: "Igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra, o "Dar algo o hacer un beneficio en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto que se ha causado".

11 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del día catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011), radicación número: 05001-23-25-000-1994-00020-01(19031), actor: Antonio José Vigoya Giraldo y otros.

13

Al respecto el H. Corte Supremo de Justicia, en providencia reciente¹² sostuvo:

Desde esta perspectiva, y en contraposición al daño estrictamente patrimonial, el perjuicio extra patrimonial no se reduce al tradicional menoscabo moral, pues dentro del conjunto de bienes e intereses jurídicos no patrimoniales que pueden resultar afectados mediante una conducta dolosa o culposa se encuentran comprendidos aquéllos distintos a la aflicción, el dolor, el sufrimiento o la tristeza que padece la víctima. En este contexto, son especies de perjuicio no patrimonial –además del daño moral– el daño a la salud, a la vida de relación, o a bienes jurídicos de especial protección constitucional tales como la libertad, la dignidad, la honra y el buen nombre, que tienen el rango de derechos humanos fundamentales.

Así fue reconocido por esta Sala en providencia reciente, en la que se dijo que ostentan naturaleza no patrimonial: "...la vida de relación, la integridad sicosomática, los bienes de la personalidad –verbi gratia, integridad física o mental, libertad, nombre, dignidad, intimidad, honor, imagen, reputación, fama, etc.–, o a la esfera sentimental y afectiva..." (Sentencia de casación de 18 de septiembre de 2009) [Se subraya]

Estas subespecies del daño extra patrimonial no pueden confundirse entre sí, pues cada una de ellas posee su propia fisonomía y peculiaridades que las distinguen de las demás y las hacen merecedoras de tutela jurídica; aunque a menudo suele acontecer que confluyan en un mismo daño por obra de un único hecho lesivo.

Discurrió la misma Corporación en este sentido:

*De ahí que **el daño no patrimonial se puede presentar de varias maneras**, a saber: i) mediante la lesión a un sentimiento interior y, por ende, subjetivo (daño moral); ii) como privación objetiva de la facultad de realizar actividades cotidianas tales como practicar deportes, escuchar música, asistir a espectáculos, viajar, leer, departir con los amigos o la familia, disfrutar el paisaje, tener relaciones íntimas, etc., (daño a la vida de relación); o, iii) como **vulneración a los derechos humanos fundamentales como el buen nombre, la propia imagen, la libertad, la privacidad y la dignidad, que gozan de especial protección constitucional.***

Las dos primeras formas de perjuicio han sido amplia y suficientemente desarrolladas por esta Corte. El menoscabo a los bienes jurídicos personalísimos de relevancia constitucional, en cambio, aunque se ha enunciado tangencialmente por la jurisprudencia, no ha sido materia de profundización, dado que hasta ahora no se había planteado ese asunto en sede de casación.

Y es que esta nueva concepción, como lo sostiene la alta Corporación de la jurisdicción ordinaria, obedece a que "el constitucionalismo se convirtió de ese modo en el nuevo paradigma del orden jurídico, cuyo influjo ha repercutido en las demás áreas del derecho positivo, incluido el derecho civil, naturalmente, que además de la función que tradicionalmente ha cumplido como regulador de las relaciones privadas, asume ahora un carácter protector de los derechos inalienables.

(...) La atención debe centrarse, entonces, no en la posibilidad de admitir la indemnización del daño a los bienes personalísimos protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales que reconocen derechos fundamentales, como categoría autónoma perteneciente al género de los perjuicios extra patrimoniales –pues su existencia hoy en día no se pone en duda–; sino en precisar en qué casos resulta viable su concesión, con el fin de

¹² CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, M.P. Dr. Ariel Salazar Ramírez, SC10297-2014, radicación: 11001310300320030066001, sentencia del cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014).

evitar un pago doble o exagerado de una misma consecuencia nociva que tiene su causa adecuada en un único evento.

De manera que, por regla general, el desagravio del perjuicio no patrimonial carece de la virtualidad de producir un enriquecimiento injusto, pues los bienes jurídicos inherentes a la persona humana no tienen equivalencia en dinero. Luego, si la medida de satisfacción que se reconoce no lleva implícito un provecho económico sino más bien de simple consolación, satisfacción o compensación, entonces es desacertado afirmar que la misma puede dar lugar a cualquier tipo de lucro (...).¹³

Así pues en aras de satisfacer cada interés legítimo lesionado con el hecho dañoso, en el caso de autos, tenemos que además de apalear sus derechos fundamentales a la vida, el respeto por la integridad física, se generó el menoscabo de un interés diferente que no es resarcido con el reconocimiento del daño a la salud, pues además de afectarse la integridad física, el menoscabo de otros derechos constitucionales, se han visto sacudidos, como consecuencia de la afectación, así sus actividades cotidianas, deportivas, recreacionales, resultaron frustradas por la incapacidad física arrojada. De tal suerte que el disfrute a plenitud de su vida, la recreación, como un derecho fundamental, se han visto seriamente afectados con la situación ocurrida.

Recordemos que el contenido del artículo 52 constitucional, del derecho al deporte a la recreación y la educación física, plantea en su núcleo esencial la función a nivel individual, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y, a nivel social, el desarrollo social del país a través de su función socializadora, integradora y pacificadora.

La consagración del deporte como derecho tuvo como referente internacional el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consideró al deporte como un derecho social. En 1978, la Carta Internacional de Educación Física y Deporte, adoptada por la UNESCO ratificó en el mundo no sólo la importancia que tiene el deporte, sino también la educación física y la recreación como elementos esenciales dentro del sistema de educación, formación integral de las personas y enriquecimiento de la cultura. Sin duda alguna la aniquilación de algunas tareas recreacionales para los lesionados, como el desarrollado de tareas deportivas, recreativas, desencadenaron un desarrollo anormal de su vida que debe ser reparado, por la conculcación de su derecho constitucional a la recreación, al despliegue de actividades lúdicas, de la capacidad para su realización, que como consecuencia del daño sufrido se generaron.

¹³ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, M.P. Dr. Ariel Salazar Ramírez, SC10297-2014, radicación: 11001310300320030066001, sentencia del cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014).

La tasación del presente perjuicio, se estima aproximadamente en ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva, y a favor de la lesionada Marisela Soto.

GRUPO FAMILIAR DOS

1. PERJUICIOS MATERIALES. Se hará bajo las siguientes modalidades, según parámetros indicados:

1.1. Lucro Cesante. Se cancelará a favor de José Raúl Parra Murillo, la suma de sesenta millones de pesos (\$60.000.000) a cada uno, o lo que resulte probado.

1.2. Daño emergente. La suma de diez millones de pesos (\$10.000.000), o en la cuantía que se sirve determinar conforme parámetros reseñados.

2. PERJUICIOS INMATERIALES

2.1. Perjuicios morales

- JOSÉ RAÚL PARRA MURILLO, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- LILIANA AGREDO CHICAIZA, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- KAREN JULIANA PARRA AGREDO, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- LEIDY VIVIANA PARRA AGREDO, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

2.2. Daño a la salud.

- JOSÉ RAÚL PARRA MURILLO, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales de la ejecutoria de la decisión definitiva.

2.3. Daño a derechos, bienes e intereses constitucionales protegidos.

- JOSÉ RAÚL PARRA MURILLO, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

GRUPO FAMILIAR TRES

1. **PERJUICIOS MATERIALES.** Se hará bajo las siguientes modalidades, según parámetros indicados:

- 1.2. **Lucro Cesante.** Según los factores señalados anteriormente, se cancelará a favor de Claudia Johanna Posso Mejía, la suma de sesenta millones de pesos (\$60.000.000), o lo que resulte probado.

- 1.2. **Daño emergente.** La suma de diez millones de pesos (\$10.000.000), o en la cuantía que se sirve determinar conforme parámetros reseñados.

2. PERJUICIOS INMATERIALES

2.2. Perjuicios morales

- CLAUDIA JOHANNA POSSO MEJÍA, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- MELANY LICETH HURTADO POSSO, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- HELEN DAYAN HURTADO POSSO, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- JHOAN RODOLFO HURTADO POSSO, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- ELVIRA MEJÍA VENDE, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- RAQUEL POSSO MEJÍA, cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

17

- MARÍA DEL PILAR TORRES MEJÍA, cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- MAYRA ALEJANDRA POSSO MEJÍA, cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

2.3. Daño a la salud.

- CLAUDIA JOHANNA POSSO MEJÍA, el equivalente a ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

2.4. Daño a derechos, bienes e intereses constitucionales protegidos.

- CLAUDIA JOHANNA POSSO MEJÍA ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

GRUPO FAMILIAR CUATRO

1. **PERJUICIOS MATERIALES.** Se hará bajo las siguientes modalidades, según parámetros indicados:

- 1.1. **Lucro Cesante.** Según los factores señalados anteriormente, se cancelará a favor de Sandra Patricia Maya Martínez, la suma de setenta millones de pesos (\$70.000.000) o lo que resulte probado.

- 1.2. **Daño emergente.** La suma de dos millones de pesos (\$2.000.000), o en la cuantía que se sirve determinar conforme parámetros reseñados.

2. PERJUICIOS INMATERIALES

2.1. Perjuicios morales

- SANDRA PATRICIA MAYA MARTÍNEZ, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

- SARA MOSQUERA MAYA, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- OWEN ANDRÉS GIRON MAYA, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- DIANA CAROLINA MOSQUERA MAYA, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

2.2. Daño a la salud.

- SANDRA PATRICIA MAYA MARTINEZ, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

2.3. Daño a derechos, bienes e intereses constitucionales protegidos.

- SANDRA PATRICIA MAYA MARTINEZ, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

GRUPO FAMILIAR CINCO

1. **PERJUICIOS MATERIALES.** Se hará bajo las siguientes modalidades, según parámetros indicados:

- 1.2. **Lucro Cesante.** Según los factores señalados anteriormente, se cancelará a favor de Yeinson Estiven Baicue Mezu, la suma de cincuenta millones de pesos (\$50.000.000) o lo que resulte probado.

- 1.2. **Daño emergente.** La suma de dos millones de pesos (\$2.000.000), o en la cuantía que se sirve determinar conforme parámetros reseñados.

2. PERJUICIOS INMATERIALES

2.1. Perjuicios morales

- YEINSON ESTIVEN BAICUE MEZU, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- YENNI MEZU MOSQUERA, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- ALEXANDER GONZÁLEZ RAMOS¹⁴, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- JHON ALEXANDER GONZÁLEZ MEZU, cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

2.2. Daño a la salud.

- YEINSON ESTIVEN BAICUE MEZU, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

2.3. Daño a derechos, bienes e intereses constitucionales protegidos.

- YEINSON ESTIVEN BAICUE MEZU, , cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

¹⁴ Al respecto el Consejo de Estado ha reconocido la posibilidad de reconocimiento del daño a favor de los familiares de crianza. Sostuvo en sentencia proferida por la Sección Tercera el 25 de febrero de 2009, expediente 18.106 C.P. Ruth Stella Correa Palacio. "Si bien no acreditó la condición de cónyuge de la víctima, pues no aportó la prueba idónea, esto es, el registro civil de matrimonio, sino que sólo se aportó la partida eclesiástica de matrimonio, la cual no tiene la virtualidad de demostrar el vínculo marital, demostró su condición de tercero damnificado en el proceso, por cuanto este documento constituye un indicio de la relación existente entre quienes figuran en la partida eclesiástica como contrayentes, indicio que unido al hecho de que la demandante era la madre de los hijos de la víctima, conforme se acredita con los registros civiles de nacimiento, genera en la Sala la certeza de la existencia de la condición de tercero damnificado de la señora León."

Entre otras ver también, sentencia del diecinueve (19) de noviembre de dos mil doce (2012), radicación número: 05001-23-31-000-1996-02223-01 (23.343), Demandante: Marina del Socorro Parra y otros, Demandado: Nación - Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional-, Departamento de Antioquia, Municipio de Medellín y Secretaría de Educación.

GRUPO FAMILIAR SEIS

1. PERJUICIOS MATERIALES. Se hará bajo las siguientes modalidades, según parámetros indicados:

1.1. Lucro Cesante. Según los factores señalados anteriormente, se cancelará a favor de Sorayda Candelo Capote, la suma de setenta millones de pesos (\$70.000.000) o lo que resulte probado.

1.2. Daño emergente. La suma de dos millones de pesos (\$2.000.000), o en la cuantía que se sirve determinar conforme parámetros reseñados.

2. PERJUICIOS INMATERIALES

2.1. Perjuicios morales

- SORAYDA CANDELO CAPOTE, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- VIVIANA CAROLINA BARRIOS CANDELO, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- KAREN ANDREA BARRIOS CANDELO, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- KATHERIN PAOLA BARRIOS CANDELO, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- WILMAR ALEXIS BARRIOS MURILLO, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- AYDA MARIA CAPOTE, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- JOAQUIN CAPOTE, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.
- TANIA PAMELA CAPOTE MUOZ, cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

21

- MARÍA CAMILA CAMPUZANO BARRIOS, cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

2.2. Daño a la salud.

- YEINSON ESTIVEN BAICUE MEZU, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

2.3. Daño a derechos, bienes e intereses constitucionales protegidos.

- YEINSON ESTIVEN BAICUE MEZU, cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria de la decisión definitiva.

3. OTRAS MEDIDAS REPARATORIAS.

La jurisprudencia de la alta corporación de lo contencioso administrativo ha expuesto la necesidad de reparar integralmente a la víctima del daño causado por las entidades públicas, que obedece no sólo a la materialización del principio de "reparación integral" que nuestro ordenamiento ha incorporado, sino en respuesta a la influencia de los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias al denominado "Bloque de constitucionalidad" ¹⁵.

En virtud de la figura los jueces están sujetos a tener presente los instrumentos internacionales que se incorporan en nuestro compendio normativo, tal como puede interpretarse del contenido del artículo 93 constitucional. De allí que la jurisprudencia de los intérpretes autorizados de los instrumentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad resultan efectivos al momento de interpretar el alcance de los derechos humanos y del propio Derecho internacional humanitario, y las maneras de su reparación. Precisamente el órgano judicial internacional ha trazado parámetros que nos muestra que la reparación a la víctima trasciende más allá de la obligación de dar, de lo pecuniario, para obligar al causante a hacer, como una forma de reparar integralmente el perjuicio causado. Respecto a la procedencia de éste tipo de medidas correctivas, sostuvo el H. Consejo de Estado:

¹⁵ CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-370 de 2006.

Como se precisó, el daño antijurídico considerado como lesión de un derecho, bien o interés legítimo supone la alteración o afectación de un estado de cosas que impacta de manera negativa la esfera interna y externa de la persona que lo padece y, por consiguiente, no sólo comprende la órbita patrimonial. Así las cosas, el principal objetivo del derecho de daños consiste en reparar integralmente la afectación padecida por la persona en su vida, integridad o bienes, razón por la que a la hora de valorar la misma es necesario establecer e identificar si es posible que opere la restitutio in integrum y, de ser factible, adoptar las medidas deprecadas en la demanda –o que, dependiendo del caso concreto puedan ser decretadas de oficio por el juez– tendientes a que se restablezca el statu quo o estado de cosas anterior a su producción. Es decir, llevar a la víctima de un daño antijurídico a un estado como si no se hubiera producido, o en otros términos remover los efectos negativos que el mismo desencadena. No obstante, si lo anterior deviene imposible en términos materiales, resulta imprescindible establecer cuál es la magnitud del daño antijurídico y qué medidas de reparación pueden ser decretadas para resarcir las consecuencias de aquél, como por ejemplo la indemnización por equivalente. Así las cosas, la reparación no se asimila a indemnización, ya que esta última constituye uno de los varios componentes que integran a la primera y, por ende, la relación que existe entre uno y otro concepto es de género y especie, motivo por el cual el daño antijurídico desde el paradigma actual de la reparación desborda el que impone el concepto de patrimonio. Los anteriores lineamientos se acompasan con las posturas y tendencias modernas de la responsabilidad que desbordan el concepto de "responsabilidad patrimonial", para adoptar la categoría de "derecho de daños", en el que el eje central lo constituye la persona que padece la afectación y, por consiguiente, la principal función de la responsabilidad en el mundo moderno consiste no tanto en sancionar conductas como en restablecer los derechos, bienes o intereses legítimos que se afectan con la producción de un daño. En ese orden de ideas, la Sala ante la gravedad de los hechos en el caso sub examine, adoptará una serie de medidas y determinaciones que apuntan a reparar de manera integral el daño irrogado a los demandantes, constituido aquél no sólo por los perjuicios materiales e inmateriales que tienen repercusión patrimonial y que fueron determinados en los acápites anteriores, sino, adicionalmente, por las graves y significativas vulneraciones a los derechos humanos –fundamentales– de los demandantes.(...)"¹⁶.

3.1. Medidas de rehabilitación.

Solicitamos al señor Juez de Conocimiento se sirva ordenar a las entidades demandadas disponer lo necesario para que por su cuenta se brinde a los demandantes la asistencia clínica, de carácter necesaria para la superación de las secuelas que en estos dejó el suceso.

TERCERO. Que se ordene que el valor de la indemnización se liquide con el ajuste previsto en el artículo 192 inciso 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO. Que se ordene cumplir con la sentencia en el término indicado en el artículo 192 inciso 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

¹⁶ Sentencia del catorce (14) de abril de dos mil diez (2010), Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00595-01(18960), C.P. Dr. Enrique Gil Botero, Actor: Rogelio Aguirre López y otros.

H E C H O S

PRIMERO. El Departamento del Cauca, ha sido una de las zonas más afectadas por los actos vandálicos y violentos de grupos al margen de la ley. La academia ilustra que “El Cauca es parte de un corredor estratégico de movilidad de armas y droga, que comunican a los departamentos del Cauca, al Tolima y el Valle del Cauca. Gran parte de las rutas de envío de drogas ilícitas y los canales comerciales para armamento y contrabando se consolidan en Buenaventura. Así, la cadena del negocio ilegal se expande en una ruta que recorre desde el Norte del Valle hasta las salidas al pacífico. La geografía del corredor desplegada en el departamento, cubre territorios estratégicos, no se limitan al dominio de la carretera Panamericana y las salidas al mar. En este momento el Cauca es un corredor en disputa por los actores armados ilegales fundamentalmente por el control del tráfico de drogas.”

La barbarie de las acciones bélicas de todos los actores es cada vez más frecuente en 16 de los 42 municipios del departamento. Los municipios de Villa Rica, Caloto, Toribio, Corinto, Miranda, El Tambo, Argelia y Guapi, son los más afectados y en los que se presentan ataques con mayor frecuencia. Es evidente como en esta zona del país se ha vulnerado los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario – DIH. (...)

Las comunidades Caucanas intentan escapar de la violencia, pero por estas razones e intereses económicos de la verdadera violencia, no pueden escapar, quedando en medio del fuego cruzado. En estas circunstancias, la apuesta del pueblo Nasa de sacar de sus territorios a todos los grupos armados, tanto a la guerrilla como a la Fuerza Pública es relevante y se destaca como un gran ejemplo de resistencia pacífica. El conflicto arroja anualmente cientos de muertos entre militares, guerrilleros y civiles, construir un escenario de paz y dialogo seguramente será más rentable para la sociedad colombiana.”¹⁷

SEGUNDO. “Las dinámicas del conflicto armado en el departamento del Cauca se caracterizan por la presencia histórica de grupos armados; situación que se hace aún más compleja por las confrontaciones sociales, como consecuencia de los altos niveles de pobreza; según el censo del 2005, 46,41% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas, las disputas por la tierra entre colonos, campesinos, indígenas y afrocolombianos.

Desde 1954 se tiene registro de presencia guerrillera en este territorio, cuando luego de los bombardeos a Villa Rica, los guerrilleros liberales abandonaron el Tolima y cruzaron hacia el

¹⁷ Fuente: <http://www.arcoiris.com.co/2012/07/las-razones-detras-del-conflicto-en-el-cauca/>, Redireccionado por Google, mayo 17, 2013, hora 9.30 a.m.

Cauca. En 1964, el Bloque Sur de las FARC se dirige a Tierradentro, hoy en día Inzá y Páez, luego del ataque a Marquetalia. Con la retoma de este último territorio por parte de las FARC, Cauca se convierte en un territorio de retaguardia.

En el Cauca han ejercido presencia, además, otros grupos guerrilleros; “ha habido una presencia histórica de diversos actores armados: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Movimiento Quintín Lame, el Movimiento Jaime Bateman Cayón, el Comando Ricardo Franco Frente-Sur, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Comando Pedro León Arboleda” (Ávila, 2009 p. 7).

Las FARC tienen presencia actualmente en el departamento, al norte con el frente 6, en los municipios de Toribio, Corinto, Miranda, Santander de Quilichao, Jambaló, Caldone y Caloto. Al oriente con la columna Móvil Jacobo Arenas. En el Tambo, Patía, Timbío y Argelia con el frente 8 o “José Gonzalo Sánchez” y en la Bota Caucana con el frente 64 o “Arturo Medina” y el frente 60. Sobre el departamento también ejercen influencia estructuras externas como el Bloque Móvil Arturo Ruiz que opera en el Valle del Cauca o el Bloque Sur que tiene como centro de acción Huila y Caquetá.

El ELN tiene también una presencia histórica en el departamento, a través del frente Manuel Vásquez Cataño que surgió en la Bota Caucana, en Almaguer, Rosas, San Sebastián, Bolívar, La Vega, La Sierra, Santa Rosa, Timbío y Florencia; del cual surgen a la vez el frente Manuel Cárdenas Arbeláez que opera en el norte del Valle y la regional urbana Omaíra Montoya Henao con operaciones en Cali, Popayán y Pasto, el frente Comuneros del Sur en Nariño, y la estructura urbana La Gaitana en el Huila. El frente Manuel Vásquez debe su crecimiento a las extorsiones en las zonas petroleras del Huila y mineras de Nariño. También operan en el Cauca la columna móvil Camilo Cienfuegos creada en 1999, las columnas Lucho Quintero y Milton Hernández creadas en el 2003.

En cuanto a los grupos paramilitares, la primera organización con presencia en la región son las autodefensas campesinas de Ortega, que surgen en 1963, y a finales de la década de 1990 pasan a formar parte de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-. En los años de 1980, ingresan al departamento grupos de seguridad pagados por narcotraficantes provenientes del Valle del Cauca. Con la entrada de las AUC al Cauca a través del Frente Libertadores del Sur, el Bloque Calima, el Bloque Farallones y el Bloque Pacífico, se da inicio a

formas de violencia generalizadas en contra de la población civil por parte de los grupos paramilitares" ¹⁸

TERCERO. A pesar de todo el ámbito hostil del departamento, en especial de ciertos municipios del norte caucano, la presencia de la Fuerza Pública no se ejerce de una manera proporcional al requerimiento esperado. A ello se suma, que a pesar de reiterativos hostigamientos a establecimientos militares y policiales en varios municipios, la Fuerza Pública en anuencia de cada ente territorial municipal han permitido la ubicación de sus sedes en medio de la población civil, lo que hace mucho más vulnerable a los administrados, los estudios muestran que "el primer acercamiento al tipo de violencia generado en el Cauca se puede hacer mediante la comparación de indicadores como el nivel de muertos civiles en eventos de conflicto y el nivel de homicidios. Particularmente, el Cauca registró entre 1997 y 2007, 538 muertos civiles en eventos de conflicto y 5.830 homicidios" ¹⁹. La estrategia estatal y el desarrollo de la guerra, continúan colocando al Cauca como uno de los escenarios principales y permanentes del conflicto armado en el país,

CUARTO. Para el día veintiséis (26) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019) el municipio de Miranda resultó estremecido, luego que se dirigiera un ataque violento contra la instalación de la alcaldía municipal, tal como lo certificó el Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario de tal dependencia, en escrito fechado once (11) de diciembre de dos mil veinte (2020), el cual se adjunta a esta reclamación.

QUINTO. Según versiones entregadas por funcionarios públicos, no hay claridad sobre la autoría, pues en el sector operan miembros del autodenominado Ejército de Liberación Nacional y grupos disidentes de las FARC. Así mismo, no dejaron de lado que en la época había seria tensión por los diálogos sostenidos entre el gobierno nacional y la denominada minga indígena ²⁰.

SEXTO. La onda explosiva generó daño en el garaje de la sede de la alcaldía, así como en varias viviendas y locales comerciales ubicados en inmediaciones del sector.

SÉPTIMO. Se conoce por versiones de quienes se encontraban en inmediaciones de la locación que el complejo del despacho no contaba con la presencia policial necesaria

¹⁸ Fuente: http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/cauca.pdf/, Redireccionado por Google, mayo 17, 2013, hora 9.34 a.m.

¹⁹ Fuente: http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/cauca.pdf/, Redireccionado por Google, mayo 17, 2013, hora 9.34 a.m.

²⁰ Fuente: <https://www.elspectador.com/noticias/nacional/detonan-motocicleta-bomba-frente-a-parqueadero-de-la-alcaldia-en-miranda-cauca/>.

para este tipo de sede pública. Así se confirma en comunicación del treinta y uno (31) de mayo del año dos mil veintiuno (2021) signada por el Intendente Diego Fernando Sema en calidad de Jefe oficina de asuntos jurídicos del Departamento de Policía Cauca.

OCTAVO. El suceso dejó, además, varias personas lesionadas sumado a los múltiples daños materiales de casas – habitaciones del sector, unas en mayor proporción, otras no tanto, que dependió de la cercanía al despacho municipal.

Las lesiones causadas a nuestros poderdantes obedecen a la intempestiva reacción ante la explosión, así por ejemplo la fémina Marisela Soto fue expulsada de su cama, lo que provocó seria perturbación en la región lumbar. En el mismo sentido el señor José Raúl Parra Murillo sufrió un fuerte golpe en brazo derecho al caer al piso, buscando protección. A ello se agregan los efectos emocionales, que no sólo es el estado zozobra que generó el momento y el alto grado de nerviosismo, sino el temor que reina a pesar del transcurso del tiempo, por la terrible expectativa de resultar involucrado nuevamente en sucesos como éste.

NOVENO. El nivel de impacto se torna tan grave, como así lo han descritos los profesionales del área, quienes certificaron síntomas como trastornos del sueño, ansiedad, desesperación, desesperanza, necesidad de protección, depresión, irritabilidad mucho temor y angustia, que fuera calificado mayoritariamente como una patología de estrés pos-traumático.

DÉCIMO. El daño a su capacidad emocional ha permeado la productividad laboral de los reclamantes, tal como se relevará en las valoraciones que determinaron su pérdida de capacidad laboral.

UNDÉCIMO. Tal como aparece relacionado en el caudal probatorio, la mayoría de los poderdantes terminaron con averías en los inmuebles que habitan, que los obligó a realizar las reparaciones locativas necesarias para permitir el uso normal del inmueble que les sirve de asiento, a unos en calidad de propietarios y a otros en calidad de poseedores.

DUODÉCIMO. A la fecha se desconoce la suerte de la investigación penal que se adelanta con ocasión del suceso.

DÉCIMO TERCERO. Conforme la carga procesal que impone el inciso segundo del artículo 173 del Código General del Proceso, se realizó por la parte convocante, solicitud a las diversas dependencias la información necesaria, y a la que se podía acceder²¹; para demostrar los supuestos referidos.

²¹ Es decir al documento que no posea reserva judicial.

DÉCIMO CUARTO. En cumplimiento de la exigencia del artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, que creó el artículo 42 A de la Ley 270 de 1996; se presentó el día diecinueve (19) del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021) la convocatoria de conciliación extrajudicial, la cual se llevó a cabo el día veintiuno (21) del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2019), declarándose fallida, como consta en acta que se anexa expedida por la Procuraduría 183 Judicial I para asuntos administrativos de Popayán.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Constitución Nacional, artículos 1, 123, 124, 125, 150, 313, 315, 333 y 338.

El artículo 2 indica:

Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado.

Posteriormente en su artículo 90, reza:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas".

Convención Americana de Derechos Humanos²², artículo 1.

Sostiene en su artículo 1,

Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano."

²² Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.

Ley 446 de 1998,

Ley 472 de 1998

Ley 153 1887

Ley 962 de 2005

Fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial de las instituciones públicas.

El artículo 1 de nuestra Carta Política concibe el Estado Social de Derecho como aquel de profundo respeto por la dignidad humana y la solidaridad de las personas con una prevalencia del interés general sobre el particular; norma que debe concordarse con el artículo 2 en su inciso 2 al determinar que *"las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derecho y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares"*.

El artículo 90 de nuestra Constitución Política señala: *"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas"*. La última parte de este inciso hace relación a la causalidad, y de ella depende el examen de la imputación o adjudicación del daño a las autoridades públicas.

Nuestra Constitución Política en el citado artículo 90 nos enseña que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que se ocasionen como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades públicas. Así las cosas, como lo ha distinguido la jurisprudencia y la doctrina, a partir de este texto constitucional el deber resarcitorio o de reparación a cargo del Estado emerge cuando se ha causado un **daño antijurídico** que le sea **imputable**.

Es así como, dentro de este nuevo universo constitucional, la responsabilidad no está únicamente ligada al actuar negligente, culposo o doloso, es decir a criterios subjetivos, desplazándose a criterios objetivos, fundamentados en principios de **justicia, equidad, solidaridad**, etc., en donde la importancia gira alrededor de quien sufre el daño. Es así, como puede hallarse el Estado obligado a resarcir un perjuicio causado a pesar que su actividad o actuación esté dentro de los marcos de la licitud. Esta filosofía jurídica, argumentada desde hace varios años, se alimenta con la esencia del artículo 90 de nuestra Constitución al disponer la responsabilidad estatal por los *daños antijurídicos*.

El daño antijurídico es fuente de responsabilidad estatal y a su vez la teoría de la responsabilidad objetiva adquiere fundamento constitucional, razón por la cual surge la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado como el punto de intersección a través del cual encuadra cualquier régimen de responsabilidad.

El concepto de daño antijurídico no ha sido definido en nuestra legislación, pero hace varios años la jurisprudencia colombiana ha venido formando la teoría de la Lesión resarcible fundamentada en el daño antijurídico, basados en la doctrina española, y es así como en distintos fallos emitidos por el Consejo de Estado se encuentra una concepción del daño antijurídico que lo consagra como el fundamento de todo deber y obligación de reparación.

De ahí, que el objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado es el restablecer el equilibrio económico roto cuando se lesiona un patrimonio particular por parte de la administración pública. Se ha pasado de la llamada antijuricidad subjetiva, que exigía el dolo, la culpa o falta del funcionario de la administración para generar la responsabilidad del Estado, a la llamada antijuricidad objetiva, que tiene como fundamento el daño ocasionado a la víctima, que pasa a ser el elemento más importante de la responsabilidad patrimonial estatal.

De los regímenes de responsabilidad aplicables al caso sub júdice.

En reiteradas oportunidades la Alta Corporación de lo Contencioso Administrativo se ha pronunciado sobre la obligación resarcitoria que surge para el Estado en el evento de los daños causados a los administrados con ocasión de las acciones violentas de los grupos subversivos o al margen de la ley, de las que en ocasiones han sido objetivo instituciones públicas o funcionarios representativos de las mismas, y en otras la población civil.

Ha indicado que además de los deberes constitucionales fundamentales a cargo de gobernados y gobernantes sobre los cuales se edifica el Estado Social de Derecho, en el que imperan la Constitución, las leyes, el respeto y obediencia a las autoridades (arts. 4 y 6), el deber correlativo de las autoridades de protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, y la garantía en relación con el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (art. 2), tratándose de estos eventos hay unas condiciones sui generis que revisten características particulares para deprecar su deber resarcitorio.

El historial procesal y probatorio que en este litigio se recaudarán, permitirán encausar con muchísima claridad la responsabilidad de las entidades públicas vinculadas bajo la tesis objetiva; según circunstancias que relatáremos y si se quiere bajo la tesis subjetiva, pues ha concurrido en este hecho una evidente falla en el servicio.

En el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado la jurisprudencia ha aplicado varios títulos jurídicos de imputación en relación con los eventos de actos violentos contra lo que implique representación estatal. Se ha acudido al de **riesgo excepcional**²³ cuando el "daño" tiene su causa en el rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas producto del riesgo en que se pone al administrado²⁴. Aunque la disquisición no ha sido muy clara, bajo premisas similares, se acudió igualmente al título de imputación de **daño especial**²⁵. Sin embargo, cuando la causa de los daños se origina en otro tipo de hechos, según estos debe

²³ Entre otras, sentencia del 23 de septiembre de 1994, C.P. Dr. Julio César Uribe Acosta; Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, radicación 1994 04398-01, CP Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez, sentencia del 5 de diciembre de 2005, radicación 16149, CP Dra. María Elena Giraldo Gómez.

²⁴ Valga aclarar que en el devenir jurisprudencial, sin variar la sustentación de fondo, el Consejo de Estado ha encuadrado estos eventos en la teoría del riesgo excepcional, pues se configuran elementos muchos más propios de esta tesis que el del denominado daño especial, que predominó como criterio de imputación de responsabilidad hasta hace algunos años. Ver sentencias del 25 de octubre del año 1991, expediente 6680; 25 de marzo del año 1993, expediente 7641; 12 de noviembre del año 1993, expediente 8233; 28 de abril de 1994, expediente 7733.

Existió una confusión general, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, entre el daño especial y el riesgo, quizás porque los dos han buscado por fundamento el principio de igualdad de las personas frente a las cargas públicas y porque ambos han invocado, para su existencia, razones de equidad, sin detenerse a pensar que la actividad legítima del Estado causante del daño puede ser riesgosa o no.

En el primer caso, el título de imputación del daño al Estado será el riesgo que, por excepcional, rompe el principio de igualdad de las personas ante las cargas públicas; en el segundo, la ruptura del mismo principio no se presenta en el título de imputación sino el daño mismo que, por esa razón, deviene antijurídico; de este modo la antijuridicidad del daño dependerá, precisamente, de tal desequilibrio que, en ese caso, deberá revestir las características de anormalidad y especialidad.

Por otro lado, la aplicación del daño especial, requiere de una acción lícita del Estado; dicha acción es la causante del daño; allí radica la particularidad del sistema: normalmente, las acciones estatales que están conformes con el ordenamiento jurídico no generan daños indemnizables; salvo que, en ciertos casos, tales daños quebranten, en sí mismos, el principio de igualdad de las personas ante las cargas públicas, lo cual hace antijurídico el daño y, por consiguiente, indemnizable en los términos del artículo 90 constitucional. De allí la tradicional exigencia de que se trate de un daño anormal, lo que, a contrario sensu, estaría significando que el daño normal ocasionado por una actividad lícita del Estado no es indemnizable por no revestir antijuridicidad.

En el evento de los actos terroristas, el causante directo del daño no es el Estado (salvo que se tratase de uno de los fenómenos que se conocen como terrorismo de Estado que configuraría una típica falla del servicio), sino un tercero: el terrorista. Esa sola circunstancia hace inaplicable el régimen del daño especial que, como se ha visto requiere de una acción estatal, bien que lícita, como causante del daño. En estas condiciones, y situados específicamente en el caso de los daños causados por atentados terroristas que corresponden, normalmente, a un hecho exclusivo de tercero, que no compromete, por lo mismo, la responsabilidad del Estado, la aplicación del llamado daño especial se ve lejano, dado que éste requiere de una acción positiva y legítima del Estado como causante del daño la cual no aparece en los eventos comentados en los cuales, se repite, la acción que origina el perjuicio es de un tercero.

En tratándose del riesgo, en cambio, dicho desequilibrio no se presenta en el daño, sino en el riesgo a que se expone a los administrados merced a una actividad estatal; dicho riesgo no es el daño; lo precede; de modo que el daño resulta ser la concreción de la actividad riesgosa. Es ese riesgo, creado por el Estado y causante del daño, y no la anormalidad del daño que acarrea la vulneración del principio de igualdad frente a las cargas públicas, lo que hace que el mismo le sea imputable.

²⁵ Ver, entre otras, sentencia de febrero 8 de 1999, exp. 10731, CP. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de febrero 9 de 1995, exp. 9550, CP Julio César Uribe Acosta, sentencia de julio 13 de 2005, exp. 11372, CP Dr. Ramiro Saavedra Becerra, sentencia de mayo 3 de 2007, exp. 16696, CP Enrique Gil Botero.

aplicarse el **de falla probada**²⁶ cuando la irregularidad u omisión administrativa permitió la ocurrencia del daño.

(i) Responsabilidad subjetiva del Estado en el caso de los perjuicios causados por atentados terroristas.

El tema de la prueba de la conducta bajo el título jurídico de falla del servicio se enfoca en la acreditación de la existencia de un deber para la Administración en las circunstancias concretas debatidas y en la desatención de ese deber, con motivo de una conducta de acción o de omisión de la entidad demandada.

Si bien es cierto el atentado terrorista tiene la particularidad de la sorpresa y de ocasionar una gran tragedia, en ocasiones ese factor *sorpresa* no tiene la equivalencia de imprevisibilidad. De ahí, para el caso que nos ocupa, existen determinadas circunstancias que desnudan la negligencia y conductas omisivas de la entidad policial y la territorial.

Mucho se ha discutido acerca de la responsabilidad del Estado por los denominados actos de terrorismo o de la subversión, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política. Lo primero que hay que advertir es que, en estos eventos, estamos siempre ante el hecho de un tercero, que, sin embargo, dadas las circunstancias especiales en que suceden, puede no ser ajeno a la acción u omisión del Estado, lo que permite atribuir a éste responsabilidad patrimonial.

Aquí la imputabilidad jurídica resulta del incumplimiento, por parte de la administración, de su deber de protección frente a las personas, como ocurre, por ejemplo, cuando una de ellas se encuentra en situación de grave peligro, que aquélla conoce –sea que se le haya solicitado protección o que ésta debiera prestarse espontáneamente, dadas las circunstancias particulares del caso. Son estas las situaciones que obligan a evaluar el alcance del deber de protección estatal y constituye uno de los eventos en que adquiere relevancia la denominada teoría de la relatividad de la falla del servicio.

Recuérdese que en los eventos de los daños producidos por los atentados terroristas no se puede perder de vista que se trata de actos y hechos de terceros; sin embargo, tal como la jurisprudencia nacional y la doctrina ha sostenido frente a esta situación hay que tener en cuenta que el Estado expone, a unas personas más que a otras, a ser blancos de atentado por una obra o por una actividad suya, es lo que en ciertas oportunidades se ha

²⁶ Ver, entre otras, sentencia de noviembre 6 de 1998 de la sección tercera, con ponencia del Dr. Daniel Suárez Hernández.

denominado por los juristas como el riesgo creado por el Estado, que hace factible la imputación al Estado como el obligado a indemnizar, y en otras hipótesis el ente público permite la actuación delictiva de un tercero, es decir que el hecho del terrorista o delincuente está ligada a la actitud omisiva de las instituciones públicas encargadas de cumplir con la obligación de vigilancia, custodia o cuidado.

En el caso bajo estudio, debemos tener en cuenta la misma situación social de del lugar donde se desarrollaron los sucesos que han dado origen a esta reclamación, es decir los antecedentes de las acciones delictivas de los grupos insurgentes, lo que conminaba a las autoridades territoriales en coordinación con las Fuerza Públicas a tomar medidas preventivas o cautelativas en lugares de gran afluencia, en los sectores viales de tránsito permanente, o los estamentos de la Policía Nacional o Ejército Nacional, lo que en términos jurídicos podemos relacionar con la previsibilidad de los actos de terrorismo. En la teoría de la falla de servicio debe partirse que el cumplimiento de las obligaciones constitucionales o legales, puedan realizarse dentro del marco de lo razonable y posible, así pues se ha destacado la relatividad del servicio, así de las obligaciones es posible considerar la previsibilidad de la acción de un tercero.

En el caso de autos, frente a escenarios en donde es la despejada la proximidad del ataque, las medidas de contingencia acogidas por el Estado deben ser mucho más convenientes y convenientes. Si nos encontramos ante situaciones de orden público que aventajan el margen de alteraciones corrientes, las medidas de protección deben ser reforzadas, que denote la diligencia en tratar por lo menos de contrarrestar los eventos adversos.

Así, por ejemplo, para señalar obligaciones recordemos que tratándose de las autoridades territoriales el régimen municipal ordinario, contenido en el decreto ley 1333 de 1986, el cual prevé en materia de orden público lo siguiente:

ARTÍCULO 130. El Alcalde es el Jefe de la administración pública en el municipio y ejecutor de los acuerdos del Concejo. Le corresponde dirigir la acción administrativa, nombrando y separando libremente sus agentes y dictando las providencias necesarias en todos los ramos de la administración.

El Alcalde es el Jefe de Policía en el Municipio. La Policía Nacional, en el Municipio, estará operativamente a disposición del Alcalde, que dará sus órdenes, por intermedio del respectivo Comandante del Municipio o de quien lo reemplace. Dichas órdenes son de carácter obligatorio y deberán ser atendidas con prontitud y diligencia".

Lógico es, que la exigencia a la Fuerza Pública y las propias autoridades territoriales no puede generalizarse, ni pedirse lo imposible, pero lo sucedido en épocas inmediatamente anteriores hacían previsible el hecho atroz. Era predecible los objetivos de los grupos al

margen de la ley quienes habían emprendido actuaciones con el ánimo de desestabilizar y crear zozobrar en varios municipios del territorio caucano.

La omisión en el presente salta de bulto evidente y fue un hecho notorio que los acontecimientos delictivos no se constituyeron en hechos esporádicos e inesperados que hubiesen imposibilitado la actuación y protección por parte de las autoridades militares y policiales, por el contrario, los momentos de agitación social marcaban el derrotero subversivo, haciendo predecible la necesidad de los actos preventivos contra los delincuentes o insurgentes.

La presencia del Estado por medio de las Fuerzas Armadas en determinados lugares de la República, deben tener alguna significación. Es precisamente el Estado, como persona dotada de facultades y de tales Fuerzas, la llamada a mantener el orden público y hacer efectivo las disposiciones y finalidades constitucionales, como preservar la integridad y los bienes de los habitantes del territorio nacional. Por lo tanto, en la medida que físicamente hubiese cumplir con sus obligaciones legales y constitucionales y es renuente a ello aparece ipso facto la responsabilidad bien sea de orden penal, disciplinario o patrimonial.

Como lo había sostenido, es en estos casos donde cobran vida los mandatos constitucionales y lo trascendental de objetivos fijados por la Carta Superior²⁷. Pero obviamente debemos entender que el cumplimiento de los deberes está sujeto a la capacidad del Estado para atender la necesidad; sería un absurdo que se pretendiera exigir del Estado la protección individual hasta el último riesgo y hasta la más imprevisible amenaza; pero cuando sobrevienen circunstancias extraordinarias, se requiere entonces la presencia especial de la autoridad.

Ha sido reiterativa la jurisprudencia contenciosa administrativa que el deber de protección de las autoridades públicas está condicionado por las limitaciones que lo afectan, entre otras la carencia del recurso humano, físico y tecnológico suficiente que les permita afrontar los conflictos de todo orden que aquejan el territorio de un país, generados vr. gr. por la incesante lucha contra el narcotráfico y la subversión. Sin embargo, para el caso de autos el momento social del norte del departamento del Cauca; hacían previsible para las

²⁷ Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

autoridades hechos como los ocurridos, es más cuando hay constancia de haberse presentado agresiones contra varios estamentos policiales y públicos.

Así entonces pudiendo haber actuado la fuerza pública y no lo hizo a pesar de lo que el momento social exigía hace responsable a la institución del daño material sufrido por el reclamante y sus familiares. Ya en situaciones similares la misma Corporación ha expresado el deber resarcitorio del Estado al incumplir un deber u obligación legal o constitucional:

Concluye la Sala: para que se configure la falla del servicio público por los daños causados a bienes particulares, con actos violentos o terroristas provenientes de grupos al margen de la ley, requiere que la persona afectada haya solicitado directamente a los organismos de seguridad la protección y vigilancia adecuada para que ese deber general de protección del Estado se concrete mediante ese llamado especial y fundado; y que además, se demuestre en el proceso que el Estado, a pesar de contar con los recursos físicos, tecnológicos y personales que le permitían proporcionar seguridad y vigilancia al afectado, no lo hizo o lo hizo de manera tardía o deficiente, incumpliendo así con lo normado en la Constitución y las leyes". (Sentencia de noviembre 6 de 1998, con ponencia del Dr. Daniel Suárez Hernández)

En los términos de responsabilidad estatal, es bien sabido que una de las causales eximentes de la misma es el acto exclusivo de un tercero, lo que convierte por tanto al autor de la actuación dañosa en una causa extraña y por ende un elemento de ruptura del nexo causal. Sin embargo, si el hecho del tercero pudo haber sido impedido completamente por la institución pública, el daño causado por el tercero deberá atribuirse al ente estatal encargado de detener la acción.

"Tratándose de la responsabilidad por omisión, una vez establecido, el análisis debe conducirse hacia la determinación de la causalidad y la imputabilidad. A efectos de determinar el primer punto, es decir la causalidad, se aplica la teoría de la causalidad adecuada, en ese sentido, el problema radica en establecer, en principio, si existía la posibilidad real y efectiva para la entidad demandada de evitar el daño, mediante la interrupción del proceso causal. Y posteriormente, se analizará la imputación, en referencia a la existencia del deber de interponerse, actuando –situación en la que la obligación de indemnizar surgirá del incumplimiento, como comportamiento ilícito-, o de un daño especial o de un riesgo excepcional previamente creado, que den lugar a la responsabilidad, a pesar de la ilicitud de la actuación estatal"²⁸

El tema de la prueba de la conducta bajo el título jurídico de falla del servicio se enfoca en la acreditación de la existencia de un deber para la Administración en las circunstancias concretas debatidas y en la desatención de ese deber, con motivo de una conducta de

²⁸ CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de febrero 21 de 2002, C.P. Alir Hernández Enríquez.

acción o de omisión del demandado. Si bien es cierto el atentado terrorista tiene la particularidad de la sorpresa y de ocasionar una gran tragedia, en ocasiones ese factor *sorpresa* no tiene la equivalencia de imprevisibilidad. De ahí, para el caso que nos ocupa, existen determinadas circunstancias que desnudan la negligencia y conductas omisivas de la entidad territorial y la policial.

Se insiste, aquí la imputabilidad resulta del incumplimiento, por parte de la administración, de su deber de protección frente a las personas, como ocurre, por ejemplo, cuando una de ellas se encuentra en situación de grave peligro, que aquélla conoce –sea que se le haya solicitado protección o que ésta debiera prestarse espontáneamente, dadas las circunstancias particulares del caso; son estas las situaciones que obligan a evaluar el alcance del deber de protección estatal y constituye uno de los eventos en que adquiere relevancia la denominada teoría de la relatividad de la falla del servicio.

Retomando el título de imputación que ahora nos ocupa en discusión, son dos los eventos que configuran la falla del servicio que se alega.

1.1. Omisión en el despliegue de medidas de seguridad preventivas.

Es indudable que el Estado Colombiano es responsable de los perjuicios sufridos por los demandantes porque no cumplió con el deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los habitantes, pues no controló, previno ni evito la comisión de tan grave y lamentable acto terrorista que condujo a las lesiones físicas y las psico-emocionales de los reclamantes.

Como se probará en el transcurso de la litis las autoridades de policía actuaron con negligencia e imprevisión al dejar en situación de extrema desprotección las instalaciones externas del Comando Policial de la municipalidad, sobre todo teniendo en cuenta la grave situación de orden público existente, los constantes atentados terroristas dirigidos contra su personal y edificaciones, y los indicios que poseían los organismos de seguridad del Estado que el grupo insurgente disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC- había declarado a varios municipios del Cauca como su objetivo militar.

Conviene recordar algunos de los atentados terroristas perpetrados en el Departamento del Cauca contra la infraestructura eléctrica de la región y en especial contra los miembros de la fuerza pública, para concluir que las edificaciones policiales se habían convertido en el blanco de grupos criminales.

El que los terroristas hubieran podido concluir su plan criminal da fe de que a pesar de los nefastos antecedentes sobre ataques terroristas que habían conmocionado la comunidad, no se tomaron ni reforzaron las medidas de seguridad preventivas en relación con los sitios y personas que podía ser objeto de ataques criminales, como lo eran el Comando central; no se entiende por qué no se dispuso de los recursos humanos y logísticos con que se contaba para proteger a la población, brindando seguridad donde se consideró que existía mayor riesgo, pues así se demostrará con las pruebas solicitadas en la demanda con las que quedará claro que no existían anillos de seguridad suficientes para evitar que vehículos parquearan en inmediaciones del complejo de la institución municipal, no habían retenes, paso restringido, requisas, ni personal uniformado que evitará los lamentables hechos. Resultaría entendible que las autoridades de policía no hubieran podido evitar el hecho criminal si los autores tuviesen elegido como blanco un lugar de la municipalidad ajeno a las instalaciones de las entidades públicas para concreción de un acto delictual, pero no existe explicación alguna que justifique la falta de vigilancia y prevención en las afueras del complejo de la entidad.

De antaño la jurisprudencia contenciosa administrativa ha obligado al resarcimiento económico en eventos similares al que hoy nos ocupa; advirtiendo que ha mediado una falla del servicio, bien porque funcionarios públicos participaron directamente en la comisión del hecho; porque la víctima, o la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y ésta no se le brindó, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible. Y es precisamente esta última hipótesis la que se configuró y por la cual debe ser condenada la entidad demandada a resarcir los perjuicios sufridos por los demandantes.

Que el atentado terrorista perpetrado era un acto previsible como se podrá constatar con las declaraciones a recaudar, tal como se relacionó en el acápite fáctico de este escrito. Es de resaltar que para propios y extraños quedó al desnudo la deficiencia operativa y logística de la institución para asegurar y salvaguardar los derechos de sus administrados como su propia integridad física y bienes, producto de la omisión en el despliegue de acciones positivas para la prevención y represión de cualquier acto subversivo.

Es cierto que en los términos de la Carta Política a las autoridades se les asigna un significativo deber de protección, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente comprometida cada vez que una persona es afectada en sus derechos, pues la determinación de la falla que se presenta en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a la que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos, así como de

los recursos con que contaba la administración, todo dentro de la idea de que nadie está obligado a lo imposible, que en términos de la responsabilidad extracontractual del Estado es la denominada "relatividad del servicio", mencionado insipientemente en párrafos anteriores.

No obstante, esa relatividad, podría afirmarse que se incurre en una falla al prestar deficientemente el servicio de seguridad y vigilancia necesarias para evitar cualquier acto delincuenciales por la omisión y desacato en la adopción de medidas necesarias para la protección de los alrededores de las instalaciones de la entidad pública, que por su función especial y por la situación de orden público que se atraviesa están expuestas a un mayor peligro.

Es en estos casos donde cobran vida los mandatos constitucionales y lo trascendental de objetivos fijados por la Carta Superior. Pero obviamente debemos entender que el cumplimiento de los deberes está sujeto a la capacidad del Estado para atender la necesidad; sería un absurdo que se pretendiera exigir del Estado la protección individual hasta el último riesgo y hasta la más imprevisible amenaza; pero cuando sobrevienen circunstancias extraordinarias, se requiere entonces la presencia especial de la autoridad, si ésta no acude, su omisión consentida se resuelve necesariamente en negligencia causante de perjuicios y originaria de responsabilidad. En conclusión, haciendo previsible lo sucedido, encontrándose en la posibilidad de impedirlo y lo dejaron de hacer inexplicablemente, omitiendo sus deberes de protección a la vida, integridad física o bienes de todo ciudadano residente en territorio nacional, deberán responder por los perjuicios causados a los demandantes.

Al referente ha expresado la Alta Corporación de lo Contencioso Administrativo:

Cuando se trata de la falla del servicio originado en la omisión por la administración en la prestación de un servicio o en el cumplimiento de una obligación impuesta por la ley o los reglamentos, es necesario que aparezca demostrado no sólo que se pidió concretamente la protección o la vigilancia de la autoridad ante determinado hecho ilícito que puede causar o está causando daño o que las circunstancias o está causando o las personas en él involucradas imponían una especial protección o vigilancia y que tal protección no se prestó".²⁹

Expresó el Consejo de Estado³⁰ en un asunto de las mismas características:

Acerca de la falla del servicio de protección, la Sala ha afirmado:

"La concepción jurídica en la fijación de esos deberes de defensa de la soberanía, independencia e integridad del territorio nacional y del orden constitucional, por su propia naturaleza, implica que esos intereses

²⁹ Sentencia del 11 de octubre de 1990. C.P. Gustavo de Greiff Restrepo.

³⁰ Sección Tercera, Sentencia del 13 de febrero de 2013, exp: 25310, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

jurídicos tutelados estén amenazados o se estén vulnerando; que la situación de amenaza o de vulneración sean ciertas, concretas, determinadas y por tanto previsible en las circunstancias de tiempo y lugar, porque el modo delincencial siempre es sorpresivo; el conocimiento por parte del Estado de una situación de esas, jurídicamente lo incita, a poner en movimiento su actuar.

"Cuando el derecho a recibir protección de las autoridades en la vida, honra y bienes, ha sido quebrantado y se han producido daños no solo a los intereses colectivos sino a los individuos que de él hacen parte, el afectado tiene acción indemnizatoria frente al agente o agentes del daño; el Estado será agente del daño en concurrencia con otros cuando acaezcan las situaciones especiales y fundadas de exigibilidad (previsibilidad) de la obligación de presencia para evitar o conjurar la alteración, que ya se explicaron"(...)

La Corporación también ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado por la falla del servicio configurada a partir de la omisión de las autoridades de acudir en debido tiempo a defender la vida, honra, integridad, libertades, derechos y bienes de los ciudadanos, así como la negligencia en el diseño de medidas de contención ante la ocurrencia de incursiones por parte de grupos armados al margen de la ley, cuando su posible o inminente ocurrencia hubiere sido denunciada ante las autoridades civiles o militares:

"Lo anterior resulta suficiente para concluir que el hecho por el cual se demanda era totalmente previsible porque la Fuerza Pública tenía pleno conocimiento del planeamiento del atentado terrorista para la época en que efectivamente ocurrieron los hechos por los cuales se demanda, al punto que en uno de los poligramas remitidos a las estaciones de Policía se señaló como posibles fechas del mismo los días 9, 10, 17 y 19 del mes de julio de 1994 y el atentado en el municipio de La Calera ocurrió, precisamente, ese 19 de julio"(...)

(...)"De manera que a pesar de ser un hecho previsible no se adoptaron las medidas pertinentes para prevenir o para contrarrestar el ataque.

(...)La jurisprudencia de la Corporación acerca del carácter vinculante de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado colombiano en materia de protección de derechos humanos, a partir de los cuales se ha dado un nuevo alcance tanto al análisis de la conducta de las autoridades colombianas en casos en los cuales se haya producido una violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario, así como la utilización de los mecanismos de reparación integral contemplados en la Ley 288 de 1996, cuyo modelo lo constituye indudablemente la experiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, para la Sala:

"Las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se fundamentan en la Convención Americana de Derechos Humanos, a través de una interpretación que amplía o enriquece el ordenamiento jurídico interno, toda vez que ésta se centra en el ser humano³¹.

"Con base en ese postulado, ante la existencia de una situación calificada internacionalmente como ilícita, por acción o por omisión atribuible a un Estado, constitutiva de una violación de la obligación internacional contraída por el respectivo Estado, la Corte decide el caso bajo el régimen de la responsabilidad objetiva, ya sea de forma directa (la responsabilidad se predica de uno de los Agentes del Estado Parte) o indirecta (se imputa la responsabilidad al Estado Parte por su omisión en la protección de los derechos humanos)³².

(...)Siguiendo los lineamientos jurisprudenciales citados precedentemente, la responsabilidad patrimonial del Estado puede verse comprometida por actos terroristas realizados por terceros en aquellos casos en que se verifique la existencia de una falla del servicio. Así, para la Sala,

"... los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque"

³¹ Cita textual del fallo: "La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un cuarto de siglo". Escrito de la Juez Cecilia Medina Quiroga intitulado "Las obligaciones de los Estados bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos". San José de Costa Rica, 2005. Pág. 217.

³² Cita textual del fallo: Sobre el tema puede consultarse la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de julio de 1988 dentro del caso "Velásquez Rodríguez".

Inexistencia del hecho exclusivo de un tercero.

Si bien es cierto y sabido, que una de las causales eximentes de la misma es el acto exclusivo de un tercero, lo que convierte por tanto al autor de la actuación dañosa en una causa extraña y por ende un elemento de ruptura del nexo causal, sin embargo, si el hecho del tercero pudo haber sido impedido completamente por la institución pública, el daño causado por el tercero deberá atribuirse al ente estatal encargado de detener la acción.

Con respecto a la omisión como causa de la responsabilidad estatal, valga resaltar algunos conceptos propios plasmados en una muy reciente sentencia del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo:

Observa la Sala que se plantea, en este proceso, el interesante tema de la responsabilidad de la administración por omisión (...)

En ensayos recientes, el tema ha sido tratado por los profesores españoles, Rafael Entrena Cuesta y Mariano Magide Herrero, alguna de cuyas observaciones resultan pertinentes y se presentan a continuación:

*Se ocupa Entrena Cuesta de distinguir entre la inactividad material y la inactividad formal de la administración, explicando que la primera alude a un no hacer de ésta, en el marco de sus competencias ordinarias, mientras que la segunda se refiere a la pasividad de la administración, dentro de un procedimiento, a la no contestación de una petición a los particulares. Aplicando principios propios de la doctrina penal, que considera útiles, expresa que, como ocurre con los tipos de omisión pura, en los eventos de inactividad formal basta con el incumplimiento de la obligación de dictar una resolución dentro de los plazos previstos, para que exista responsabilidad y **cuando se trata de inactividad material, como sucede con los tipos de comisión por omisión, se requiere de la no evitación de un resultado. En este último caso se exige, por la administración se encuentre en posición de garante que se haya producido un resultado lesivo y que existiere la posibilidad de evitarlo mediante la conducta omitida, lo que supone una concepción diferente de la relación de causalidad. (...)***

Resultan, sin duda, ilustrativas las observaciones de los dos autores citados. Buscando su coherencia dentro del sistema jurídico colombiano, debe advertirse, en primer lugar, que la existencia de una responsabilidad del Estado – y concretamente de la administración- fundada en el régimen subjetivo no constituye un problema para nosotros, en la medida en que ello no contradice ninguna norma jurídica, ni tampoco los criterios que utiliza la jurisprudencia actual para decidir los casos concretos en que tal responsabilidad se plantea. En efecto, bien puede concluirse – y así se ha hecho en algunos fallos- que, en ciertos eventos, sólo una actuación o omisión ilícita de una entidad estatal puede dar origen al surgimiento de la obligación de indemnizar (como ocurre, por regla general, en los casos en que la responsabilidad tiene su fuente en un daño causado en desarrollo de la prestación del servicio médico asistencial). Lo anterior debe entenderse, por lo demás, sin perjuicio de que, pueda declararse la existencia de responsabilidad del Estado por daños causados como consecuencia de acciones u omisiones lícitas".³³

1.2. Responsabilidad objetiva del Estado por atentos terroristas.

De no tenerse probada la falla del servicio alegada, téngase en cuenta señor Juez que en estos eventos nuestro máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha entendido que el Estado se hace responsable bajo el régimen de responsabilidad objetiva, aclarando eso sí, que la discusión en cuánto al título de imputación no logró pacifismo, pues durante varios

³³ CONSEJO DE ESTADO, sentencia de febrero 21 de 2002, C.P. Dr. Alier Hernández Enríquez.

años se propuso el de riesgo excepcional, pero dejando entrever que el título acertado era el del daño especial. La última línea jurisprudencial ha marcado un derrotero bajo el entendido que la actividad legítima y lícita del Estado genera un desequilibrio en la población, y es por ello que el rompimiento de esa carga pública permite la imputación del perjuicio sufrido bajo el título de daño especial.

El H. Consejo de Estado explicó³⁴:

*La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que cabe declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en aquellos eventos en los que la actuación legal y legítima de la administración provoca un daño a un derecho jurídicamente tutelado y rompe el principio de igualdad ante las cargas públicas. Así, con base en la **teoría del daño especial**, ha considerado que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños causados a particulares en desarrollo de acciones legítimas de defensa o ataque a cargo de las fuerzas armadas³⁵.*

48. En estos casos, el fundamento del juicio de responsabilidad no es la falla del servicio o en el incumplimiento de los deberes estatales, sino la existencia de un daño antijurídico que debe ser indemnizado debido a que excede el sacrificio que cualquier ciudadano debe soportar para permitir el normal funcionamiento del Estado y de las instituciones públicas³⁶.

Advirtiendo que

en aplicación del principio iura novit curia, que no es la falla del servicio el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, sino el de daño especial. Y, en estas circunstancias, es evidente que la prueba acerca de quién fue el autor material del disparo causante de la muerte carece de relevancia para efectos de declarar la responsabilidad administrativa del Estado, pues basta con demostrar –como en efecto lo está dentro del proceso que ahora ocupa la atención de la Sala– que hubo un daño y que éste se produjo en desarrollo de un operativo militar, en el que participaron agentes estatales.

52. Al respecto conviene recordar que, para efectos de atribuir responsabilidad al Estado por los daños derivados de enfrentamiento armados entre individuos o grupos armados al margen de la ley y agentes estatales, cobra especial relevancia la distinción entre la actividad del Estado, entendida como manifestación o ejecución de una función pública, y las acciones realizadas por sus agentes. De esta manera se tiene que si el daño se produjo dentro de la acción de persecución y enfrentamiento ejecutada legítimamente por los miembros de la fuerza pública contra la delincuencia, éste se entiende cometido con ocasión del funcionamiento del servicio, y por ende resulta imputable al Estado a título de daño especial³⁷.

³⁴ CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia del 22 de marzo de 2012, exp: 22206, C.P. Daniel Rojas Betancourth.

³⁵ CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 20 de agosto de 1997, exp. 11.799. C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia del 7 de abril de 1994, exp. 9261, C.P. Daniel Suárez Hernández, sentencia de 3 de mayo de 2007, exp. 16.696, C.P. Enrique Gil Botero.

³⁶ Véanse, entre otras, la sentencia de 8 de agosto de 2002, exp. 10952. C.P. Ricardo Hoyos Duque; y de 3 de mayo de 2007, exp. 16696. C.P. Enrique Gil Botero.

³⁷ CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2007, exp. 16.696, C.P. Enrique Gil Botero. En esta oportunidad, se declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños sufridos por una menor de edad a consecuencia de la explosión de una granada que dos individuos que actuaban al margen de la ley arrojaron contra agentes de la Policía Nacional que intentaban capturarlos. Dijo entonces la Corporación: "En adición, debe establecerse con total claridad que para el caso no resulta relevante que la granada, de acuerdo con el único testigo que observó la acción, fuera lanzada por los sujetos al margen de la ley y no por los miembros de la Policía Nacional, pues la rigurosidad debida en el análisis jurídico impone a la Sección la obligación de apreciar la situación en contexto (...). Por el contrario, el análisis de la situación planteada hace imposible obviar que el daño es consecuencia de la operación policial que se estaba desarrollando (...). No podría contraponerse el argumento del hecho de un tercero o de la causa extraña, pues un análisis funcional de lo ocurrido exige situar el lanzamiento de la granada por parte del sujeto al margen de la ley dentro de la acción de persecución y enfrentamiento de la delincuencia realizada por los agentes de la Policía Nacional, es decir, dentro del funcionamiento del servicio (...). En resumen, el utilizar el daño especial como criterio de imputación en el presente caso implica la realización de un análisis que, acorde con el art. 90 Const., tome como punto de partida el daño antijurídico que sufrió la niña Angélica María Osorio; que asuma que el daño causado, desde un punto de vista jurídico y no simplemente de las leyes causales de la naturaleza, se debe entender como fruto de la actividad lícita del Estado; y, que, por consiguiente, concluya que es tarea de la administración pública, con fundamento en el principio de solidaridad

En el devenir jurisprudencial se ha configurado actualmente la categoría de “riesgo conflicto”, sin dejar de lado los demás regímenes de imputación, debido a que la Constitución Política no prefiere ningún régimen de responsabilidad en el derecho de daños, por lo que es tarea del juez en cada caso concreto, determinar el que resulta aplicable. Sobre estos aspectos, en sentencia de 27 de marzo de 2014, el Consejo de Estado, expuso:

“16. Recientemente, en algunos pronunciamientos, esta Sala ha considerado que el título objetivo de riesgo excepcional puede servir como criterio de atribución de responsabilidad por los daños derivados de ataques perpetrados por grupos subversivos contra bienes o instalaciones del Estado, en la modalidad del subtítulo denominado “riesgo conflicto”, atendiendo a los riesgos inherentes derivados del contexto de conflicto armado interno que aun asola al país. Al respecto se señaló:

Históricamente, la jurisprudencia ha definido tres modalidades básicas de responsabilidad por riesgo: el riesgo-peligro³⁸; el riesgo-beneficio³⁹ y el riesgo-álea⁴⁰. Sin embargo, los casos que involucran daños derivados de ataques guerrilleros a bienes o instalaciones del Estado, plantean una nueva categoría de riesgo, que no encaja dentro de las anteriores, y que se deriva de la confrontación armada que surge de la disputa por el control del territorio y el monopolio del uso de la fuerza.

Esta categoría de riesgo, que podría denominarse riesgo-conflicto, surge del reconocimiento de que, dada la situación de conflicto armado, el cumplimiento de ciertos deberes legales y constitucionales genera para la población civil un riesgo de naturaleza excepcional en la medida en que la pone en peligro de sufrir los efectos de los ataques armados que los grupos guerrilleros dirigen contra los bienes e instalaciones que sirven como medio para el cumplimiento de esos deberes y el desarrollo de dichas actividades⁴¹.

De esta forma, se considera que los atentados cometidos por la guerrilla contra un “objeto claramente identificable como Estado” en el marco del conflicto interno armado, tales como estaciones de policía, cuarteles militares u oleoductos, pueden ser imputados al Estado a título de riesgo excepcional no porque estos bienes e instalaciones puedan ser considerados peligrosos en sí mismos –como sí ocurre con los objetos que encuadran dentro de la categoría riesgo-peligro (p.e. armas de dotación oficial, químicos o instalaciones eléctricas)–, sino porque la dinámica misma del conflicto armado ha hecho que la cercanía a ellos genere para la población civil el riesgo de sufrir afectaciones en su vida, su integridad personal y su patrimonio en razón a que son blanco de continuos y violentos ataques por parte de la guerrilla que los considera objetivos militares.⁴²

interpretado dentro del contexto del Estado Social de Derecho, equilibrar nuevamente las cargas que, como fruto de su actividad, soporta en forma excesiva uno de sus asociados, alcanzando así una concreción real el principio de igualdad”.

³⁸ La imputación por riesgo-peligro procede en aquellos casos en los que la Administración interviene en la ocurrencia del daño, pero no por haber fallado en el cumplimiento de sus obligaciones, sino por haber creado consciente y lícitamente un riesgo a partir de la utilización de un objeto (p.e. armas, vehículos), unasustancia (p.e. combustibles, químicos) o una instalación (p.e. redes de energía eléctrica) que resulta en sí misma peligrosa, pero que es útil o necesaria para el cumplimiento de los fines del Estado o para satisfacer demandas colectivas de bienes y servicios.

³⁹ Se incluye dentro de la categoría de riesgo-beneficio aquella actividad que, aunque no entrañe verdadera peligrosidad, “conlleva la asunción de las consecuencias desfavorables que su ejercicio pueda producir, por parte de la persona que de dicha actividad se beneficia”. En este caso, el fundamento de la responsabilidad recae, no ya en el peligro creado por el Estado, sino en el provecho que éste o la comunidad reciben como consecuencia del ejercicio de la actividad riesgosa correspondiente. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de 2008, exp. 16.530, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

⁴⁰ Es el riesgo que descansa en la probabilidad estadística de la ocurrencia de un daño, derivado de la ejecución de ciertas actividades o el desarrollo de algunos procedimientos, “quizás con la ineludible mediación del azar o de otro tipo de factores imprevisibles (...). En la jurisprudencia francesa se ha reconocido la responsabilidad del Estado en estasuerte de casos cuando se emplean, por parte de la Administración, métodos científicos cuyas consecuencias dañosas aún no son del todo conocidas o cuando, a pesar de ser conocidas, resultan de muy excepcional ocurrencia, en definitiva, cuando se está en presencia del denominado ‘riesgo estadístico’”. Ibid.

⁴¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, exp. 18.536, C.P. Ruth Stella Correa.

⁴² Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de octubre de 2012, exp. 18472, C.P. Danilo Rojas Betancourth

42

Ahora bien, en decisión de unificación la alta Corporación de lo Contencioso Administrativo se inhibió de privilegiar un título de imputación específico y contrario sensu consideró que tal escogencia corresponde al juzgador conforme cada específico.

Así, ha de ser menester que en razón a que el acto terrorista efectuado por grupos irregulares fue dirigido en contra de una institución pública, envuelve la asunción por parte de la población civil de una carga que no está en la obligación, sin que se discuta el actuar legítimo o no de las entidades públicas. De tal forma, a partir del desarrollo jurisprudencial adelantado por la Máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo en materia de daños causados a la población civil producto de los ataques perpetrados en contra de las entidades o bienes del Estado, es procedente la declaratoria del débito resarcitorio.

3. Conclusión.

Con estas reflexiones encontramos que existen los elementos constitutivos de la responsabilidad que se depreca.

RELACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

I. MEDIOS DE PRUEBA APORTADOS.

Solicitamos al H. Juez de Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la ley 1437 de 2011, se tengan como medios de prueba los siguientes documentos aportados con la demanda:

GRUPO FAMILIAR UNO

1. Poderes debidamente otorgados por la parte demandante.
2. Fotocopia de los documentos de identidad de la parte demandante.
3. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Marisela Soto.
4. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Jader Albeiro González Soto.
5. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Diana Paola González Soto.
6. Fotocopia simple⁴³ de registro civil de nacimiento de Danna Sofía Osorio González.
7. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Juan Manuel Carrillo González.
8. Fotocopia simple del registro civil de nacimiento de María Yanely Soto.
9. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Jhon Beimar Suárez Soto.

⁴³ Pese a que se aportan fotocopia simple de este tipo de documento pública, téngase en cuenta que para estos efectos prestan toda credibilidad del supuesto que se pretende demostrar, la relación de consanguinidad. Así lo infirmado el Consejo de Estado "Luego la Sala con fundamento en una comprensión, convencional, constitucional, sistemática, garantística y contencioso administrativa, en la que se inspira la aplicación de los artículos 244 y 246 del Código General del Proceso, aplicable por expresa remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo [Decreto 01 de 1984], y como afirmación a tutela judicial efectiva consagrada en los artículos 1.1, 2, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 29 y 229 de la Carta Política y 11 del Código General del Proceso, y en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, como premisa básica debe proceder a valorar [lo que no implica su constatación que será sometida al contraste bajo las reglas de la sana crítica con los demás medios probatorios que obran en el expediente para determinar la certeza, verosimilitud y credibilidad del contenido de cada documento] los documentos aportados en copia simple en este proceso.

14.- Con base en los anteriores fundamentos convencionales, constitucionales y legales, la Sala tiene en cuenta como criterios para examinar el caso en concreto [que ha empleado de manera continuada la jurisprudencia de esta Sala y en correspondencia con la sentencia de unificación de la Sección Tercera] para determinar la procedencia de la valoración de los documentos aportados en copia simple al proceso, citado en el primer apartado de este título, los siguientes: (1) que las entidades demandadas en la contestación de la demanda y en sus alegaciones en primera instancia no se opusieron a tener como prueba el documento aportado por la parte actora; (2) las partes de manera conjunta en ninguna de las oportunidades procesales desconocieron tal documento, ni lo tacharon de falso, sino que conscientemente aceptaron su intención de que el mismo fuese valorados dentro del proceso; (3) las partes no ha discutido durante el proceso la autenticidad de este documento; y, (4) ambas partes aceptaron que el documento fuese apreciable y coincidieron en la valoración del mismo en forma recíproca, no sólo al momento de su aportación, sino durante el trascurso del debate procesal, por lo tanto será valorado por la Subsección para decidir el fondo del asunto⁴³.

15.- Luego, la Sala como juez de convencionalidad y contencioso administrativo procederá a valorar aquellos documentos considerados por el a quo, recaudados y aportados por las partes, enunciados al comienzo de este título, de manera conjunta, contrastada, y en aplicación de las reglas de la sana crítica con los demás medios probatorios que obran en el expediente en debida forma." Sentencia del día dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017), Radicación. 52 001 23 31 000 2003 00565 02 (33861), Actor. Luís Adalberto Gómez Pérez vs. Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional y otros.

10. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Jhon Jairo Suárez Soto.
11. Fotocopia del registro civil de nacimiento de Mélida Suárez Soto.
12. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Nancy Suárez Soto.
13. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Cecilia Soto.
14. Fotocopia de la epicrisis perteneciente a Marisela Soto, expedida por COMFACAUCA Miranda.
15. Acta de valoración psiquiátrica realizada a Marisela Soto por Luís Alfonso Gómez Campo.
16. Acta de valoración psicológica realizada a Marisela Soto por Fernando Mancilla Portocarrero.

GRUPO FAMILIAR DOS

17. Poderes debidamente otorgados por la parte demandante.
18. Fotocopia de los documentos de identidad de la parte demandante.
19. Fotocopia simple del registro civil de nacimiento de José Raúl Parra Murillo.
20. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Liliana Agredo Chicaiza.
21. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Karen Juliana Parra Agredo.
22. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Leidy Viviana Parra Agredo.
23. Fotocopia de la epicrisis perteneciente a José Raúl Parra Murillo, expedida por COMFACAUCA Miranda.
24. Acta de valoración psiquiátrica realizada a José Raúl Parra Murillo por Luís Alfonso Gómez Campo.
25. Acta de valoración psicológica realizada a José Raúl Parra Murillo por Fernando Mancilla Portocarrero.

GRUPO FAMILIAR TRES

26. Poderes debidamente otorgados por la parte demandante.
27. Fotocopia de los documentos de identidad de la parte demandante.
28. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Claudia Johana Posso Mejía.
29. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Melany Liceth Hurtado Posso.
30. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Helen Dayan Hurtado Posso.
31. Fotocopia de registro civil de nacimiento de Jhoan Rodolfo Hurtado Posso.
32. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Raquel Posso Mejía.
33. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de María del Pilar Torres Mejía.

45

34. Fotocopia auténtica del registro civil de nacimiento de Mayra Alejandra Posso Mejía.
35. Acta de valoración psiquiátrica realizada a Claudia Johana Posso Mejía por Luís Alfonso Gómez Campo.
36. Acta de valoración psicológica realizada a Claudia Johana Posso Mejía por Fernando Mancilla Portocarrero.

GRUPO FAMILIAR CUARTO

37. Poderes debidamente otorgados por la parte demandante.
38. Fotocopia de los documentos de identidad de la parte demandante.
39. Fotocopia de registro civil de nacimiento de Sandra Patricia Maya Martínez.
40. Fotocopia de registro civil de nacimiento de Diana Carolina Mosquera Maya.
41. Fotocopia de registro civil de nacimiento de Sara Mosquera Maya.
42. Fotocopia de registro civil de nacimiento de Owen Andrés Girón Maya.
43. Fotocopia de la historia clínica perteneciente a la señora Sandra Patricia Maya Martínez expedida por la ESE Norte 3 Cauca.
44. Acta de valoración psiquiátrica realizada a Sandra Patricia Maya Martínez por Luís Alfonso Gómez Campo.
45. Acta de valoración psicológica realizada a Sandra Patricia Maya Martínez por Fernando Mancilla Portocarrero.

GRUPO FAMILIAR QUINTO

46. Poderes debidamente otorgados por la parte demandante.
47. Fotocopia de los documentos de identidad de la parte demandante.
48. Fotocopia de registro civil de nacimiento de Yeinson Estiven Baicue Mezu.
49. Fotocopia de registro civil de nacimiento de Jhon Alexander González Mezu.
50. Acta de valoración psiquiátrica realizada a Yeinson Estiven Baicue Mezu por Luís Alfonso Gómez Campo.
51. Acta de valoración psicológica realizada a Yeinson Estiven Baicue Mezu por Fernando Mancilla Portocarrero.

GRUPO FAMILIAR SEXTO

52. Poderes debidamente otorgados por la parte demandante.
53. Fotocopia de registro civil de nacimiento de Sorayda Candelo Capote.

54. Fotocopia de registro civil de nacimiento de Viviana Carolina Barrios Cándelo.
55. Fotocopia de registro civil de nacimiento Katherin Paola Barrios Cándelo.
56. Fotocopia de registro civil de nacimiento de Karen Andrea Barrios Cándelo.
57. Fotocopia de registro civil de nacimiento de María Camila Campuzano Barrios.
58. Fotocopia de registro civil de nacimiento Wilmar Alexis Barrios Murillo.
59. Fotocopia de registro civil de nacimiento de Joaquín Capote.
60. Fotocopia de registro civil de nacimiento de Ayda María Capote.
61. Fotocopia de registro civil de nacimiento de Tania Pamela Capote Muñoz.
62. Acta de valoración psiquiátrica realizada a Sorayda Candelo Capote por Luís Alfonso Gómez Campo.
63. Acta de valoración psicológica realizada a Sorayda Candelo Capote por Fernando Mancilla Portocarrero.

OTRAS PRUEBAS DOCUMENTALES - COMUNES

64. Fotocopia de la petición elevada por el togado Henry Bryon Ibáñez, dirigida a la Policía Nacional del Cauca, con su respectiva constancia de entrega.
65. Comunicado identificado con número S-2019-042293 /COMAN -ASJUR-1.10, fechado nueve (9) de julio de dos mil diecinueve (2019) signado por el Comandante del Departamento de Policía Cauca- Coronel Roberto Carlos Moreno Garzón.
66. Fotocopia de la solicitud elevada por el togado Henry Bryon Ibáñez, dirigida al Comandante de la Policía Nacional de Miranda, con su respectiva constancia de entrega veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve (2019).
67. Fotocopia de la solicitud presentada por el togado Henry Bryon Ibáñez, dirigida a la Comandante de la Estación de Policía de Miranda, con fecha de recibo tres (3) de marzo del año dos mil veintiuno (2021).
68. Comunicado identificado con número S-2021/ COMAN ASUR -1.10, fechado treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintiuno (2021) signado por Diego Fernando Navarrete en calidad de Jefe Oficina asuntos jurídicos del Departamento de Policía Cauca.
69. Fotocopia de la petición elevada por el togado Henry Bryon Ibáñez, dirigida a la Alcaldía Municipal de Miranda Cauca, con su respectiva constancia de envío.
70. Comunicado fechado el trece (13) de mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), emitida por el señor Wilson Edmundo Delgado Daza en su calidad de Secretario de gobierno, participación, jóvenes y desarrollo comunitario.
71. Fotocopia de escrito elevada por el togado Henry Bryón Ibáñez, dirigida a la Alcaldía Municipal de Miranda Cauca, en acuso a comunicación anterior.

72. Copia del petitorio enviado por correo electrónico a la Alcaldía Municipal de Miranda Cauca, el veintidós (22) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020).
73. Comunicado fechado el once (11) de mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), emitida por el señor Arley Alejandro Auseche en su calidad de Secretario de gobierno, y desarrollo comunitario.
74. Fotocopia de la petición elevada por el togado Henry Bryon Ibáñez, dirigida a la Personería Municipal de Miranda cauca, a través del correo electrónico de fecha cinco (5) de enero del año 2021 (02 folios)
75. Comunicado emitido por Diego Alejandro Gómez Quintero en calidad de Personero Municipal de Miranda - Cauca, fechada el siete (7) de enero del 2021, emitida por el Personero Municipal.
76. Fotocopia de la petición elevada por el togado Henry Bryon Ibáñez, al señor Director de la Fiscalía Seccional de Miranda a través de correo electrónico el día cuatro (4) de marzo de 2021.
77. Copia de la petición elevada por el togado Henry Bryon Ibáñez, dirigida a la Unidad para la Reparación Integral de Víctimas a través de correo electrónico el día doce (12) de enero de 2021.
78. Constancia de la remisión de la convocatoria a conciliación extrajudicial a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
79. Constancia de la audiencia de conciliación expedida por la Procuraduría 183 Judicial I para asuntos administrativos de Popayán.

II. MEDIOS DE PRUEBA A PEDIR SEAN DECRETADAS POR EL DESPACHO

2.1. DOCUMENTALES.

Solicitamos al H. Juez de Conocimiento se sirva oficiar a las siguientes entidades, a fin de determinar lo expuesto en los supuestos CUARTO, SEXTO al OCTAVO, DUODÉCIMO del acápite HECHOS de este escrito demandatorio:

Instamos al señor Juez de Conocimiento acceder al petitorio del citado recaudo documental, pues previamente se intentó su obtención por peticiones, tal como lo indica el

artículo 173 del Código General del Proceso⁴⁴, exceptuando los documentos que ostentan reserva, según las previsiones de ley⁴⁵.

2.1.1. Al señor Comandante de la Estación de Policía de Miranda (Cauca), ubicado en la calle 5 No. 6-68, para que se sirva remitir con destino a este proceso fotocopia auténtica de la siguiente documentación:

- a. Fotocopia auténtica de los protocolos de seguridad que para prestar el servicio de seguridad a las instalaciones de la Alcaldía municipal de Miranda, vigente para el día veintiséis (26) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019).
- b. Certificación en la que se indique el número de agentes de policía que se encontraban prestando guardia en la parte externa de la Alcaldía municipal de Miranda, entre los días veinticinco (25) y veintiséis (26) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019).
- c. Certificación en la que se indique qué dispositivos de seguridad se desarrollaron durante los meses de febrero y marzo del año dos mil diecinueve (2019), con el fin de garantizar la seguridad de las instalaciones Alcaldía municipal de Miranda.

Se le advertirá al funcionario que por si razones de competencia la información requerida corresponde a otro despacho, le dará traslado de esta comunicación a la autoridad respectiva para cumplir con lo ordenado.

2.1.2. Al señor Alcalde Municipal de Miranda (Cauca), ubicado en la calle 6 No. 5-21, para que se sirva remitir con destino a este proceso:

- a. Certificación en la que se indique si para el día veintiséis (26) marzo del año dos mil diecinueve (2019) existía seguridad alrededor de las instalaciones de la alcaldía. En caso afirmativo se sirva informar qué empresa de seguridad prestaba dicho servicio de vigilancia.

⁴⁴ "...El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que se deberá acreditar sumariamente".

⁴⁵ Ley 1755 de 2015, ley 1407 de 2010, ley 1015 de 2006, ley 190 de 1995 artículo 33, ley 906 de 2004 artículos 11, 18, 138, 140; ley 938 de 2004.

- b. Certificación en la que se indique el listado de las personas afectadas con el suceso del día veintiséis (26) marzo del año dos mil diecinueve (2019) contra las instalaciones de dicha dependencia municipal.

Se le advertirá al funcionario que por si razones de competencia la información requerida corresponde a otro despacho, le dará traslado de esta comunicación a la autoridad respectiva para cumplir con lo ordenado.

- 2.1.3. Al señor Personero Municipal de Miranda (Cauca), ubicado en la calle 6 No. 5-21, para que se sirva remitir con destino a este proceso certificación en la que se indique el listado de las personas afectadas con el suceso del día veintiséis (26) marzo del año dos mil diecinueve (2019) contra las instalaciones de la alcaldía municipal de Miranda.

Se le advertirá al funcionario que por si razones de competencia la información requerida corresponde a otro despacho, le dará traslado de esta comunicación a la autoridad respectiva para cumplir con lo ordenado.

- 2.1.4. Al señor Director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, ubicado en la calle 16 No. 9-64 Local Mezanine 101 Bogotá, para que remita con destino a este proceso certificación en la que se indique el nombre de las personas que resultaron lesionadas a causa del atentado ocurrido el día veintiséis (26) días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019) contra las instalaciones de la alcaldía municipal de Miranda (Cauca).

Se le advertirá al funcionario que si, por razones de competencia, la información requerida corresponde a otro despacho, le dará traslado de esta comunicación a la autoridad respectiva para cumplir con lo ordenado.

- 2.1.5. Al señor Director Seccional de la Fiscalía General de la Nación ubicado en la calle 9 entre carrera 7 y 9 Miranda- Cauca para que remita con destino a este proceso certificación en la que se indique si existe o no investigación a raíz del suceso ocurrido el día veintiséis (26) del mes de marzo del dos mil diecinueve (2019) siendo las 06:30 am, consistente en la detonación contra las instalaciones de la Alcaldía Municipal. En caso afirmativo nos indicará el despacho que asumió la investigación y su número de radicado.

Se le advertirá al funcionario que si, por razones de competencia, la información requerida corresponde a otro despacho, le dará traslado de esta comunicación a la autoridad respectiva para cumplir con lo ordenado.

2.2. TESTIMONIALES

2.2.1. Solicitamos al H. Juez de Conocimiento se sirva hacer comparecer a las siguientes personas, quienes depondrán sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el suceso dañoso, en especial sobre lo expuesto en los supuestos OCTAVO al UNDÉCIMO del acápite HECHOS del libelo demandatario:

- ARNULFO MOSTACILLA, titular con cédula de ciudadanía número 6.299.830 de Florida (Valle), quien podrá ubicarse en la carrera 5 No. 5-21 Miranda, teléfono 312 885 1127, correo electrónico de contacto: bomberosmiranda@hotmail.com
- WILFREDO CASTILLO CUENCA, identificado con cédula de ciudadanía número 10.346.797 de Miranda (Cauca), residente en la carrera 2 No. 10-36 – Miranda, teléfono 312 738 82 39.
- CRISTIAN CARDONA HERNÁNDEZ, portador de la cédula de ciudadanía número 1.114.879.519 de Florida (Valle), domiciliado en la calle 4 No. 2 A -19 Miranda, teléfono 311 312 4788, correo electrónico de contacto criscor666@hotmail.es

2.2.2. Solicitamos al H. Juez Sustanciador se sirva hacer comparecer a las siguientes personas, quienes depondrán sobre los supuestos fácticos OCTAVO al UNDÉCIMO del acápite HECHOS de este escrito demandatorio, en especial sobre los perjuicios derivados a Marisela Soto y a su grupo familiar y demás supuestos fácticos de la reclamación

- SONIA LUCÍA TORRES GUZMÁN, identificada con cédula de ciudadanía número 31.988.972 de Cali, a quién se podrá ubicar en el número telefónico 314 829 34 08.
- JOSEF MORITZ HOYOS, titular de la cédula de ciudadanía número 16.888.290 de Florida (Valle), a quién se podrá ubicar en el número telefónico de contacto 317 330 36 63.
- DAMI ROCÍO TOVAR RIVERA, portador de la cédula de ciudadanía número 25.530.525 de Miranda (Cauca), a quién se podrá ubicar en el número telefónico 321 705 15 35.

- LUZ STELLA TOBAR RIVERA, identificada con cédula de ciudadanía número 66.883.770 de Florida (Valle), a quién se podrá ubicar en el número telefónico 314 740 73 73.

2.2.3. Solicitamos al H. Juez Sustanciador se sirva hacer comparecer a las siguientes personas, quienes depondrán sobre los supuestos fácticos OCTAVO al UNDÉCIMO del acápite HECHOS de este escrito demandatorio, en especial sobre los perjuicios derivados a José Raúl Parra Murillo y a su grupo familiar y demás supuestos fácticos de la reclamación

- DAMARIS ABELLA MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía número 66.887.494 de Dagua (Valle), domiciliada en la carrera 8 No. 8-52 Dagua (Valle), correo electrónico dasaro-jc@hotmail.com, número telefónico de contacto 312 695 86 75.
- ROBINSON RUIZ ABELLA, portador de la cédula de ciudadanía número 1.107.096.394 de Cali, a quién se podrá ubicar en la carrera 8 No. 8-52 Dagua (Valle)- Correo electrónico de contacto robinsonabella32@gmail.com, número telefónico de contacto 312 772 55 81.
- GLADYS ISLENA MAYOR OROZCO, titular de la cédula de ciudadanía número 1.139.774.112 de Cali, residente en la diagonal 72C No. 26J- 55 Bloque G Apartó 102 Cali (Valle), correo electrónico de contacto glaoroz212@gmail.com.
- LUÍS ÁNGEL AGREDO CHICAIZA, identificado con cédula de ciudadanía número 16.266.089 de Palmira (Valle), domiciliado en el Corregimiento el Llanito (Florida-Valle), correo electrónico de contacto luis.angelchicaiza45@gmail.com, número telefónico de contacto 311 622 59 98.

2.2.4. Solicitamos al H. Juez Sustanciador se sirva hacer comparecer a las siguientes personas, quienes depondrán sobre los supuestos fácticos OCTAVO al UNDÉCIMO del acápite HECHOS de este escrito demandatorio, en especial sobre los perjuicios derivados a Claudia Johanna Posso Mejía y a su grupo familiar y demás supuestos fácticos de la reclamación

- YUDY PAOLA QUIÑÓNES ANGULO, portadora de la cédula de ciudadanía número 1.112.225.031 de Pradera (Valle), correo electrónico de pao13pao91@gmail.com, número telefónico de contacto 313 559 35 35.

- ANGÉLICA LOZADA URIBE, titular de la cédula de ciudadanía número 1.112.223.932 de Pradera (Valle), correo electrónico angelik2602pitre@gmail.com, número telefónico de contacto 312 388 08 99.
- JOSÉ LUÍS CAICEDO VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 94.304.785 de Pradera (Valle), correo electrónico joseluiscaicedomina644@gmail.com, número telefónico de contacto 311 341 65 81.

2.2.5. Solicitamos al H. Juez Sustanciador se sirva hacer comparecer a las siguientes personas, quienes depondrán sobre los supuestos fácticos OCTAVO al UNDÉCIMO del acápite HECHOS de este escrito demandatorio, en especial sobre los perjuicios derivados a Sandra Patricia Maya Martínez y a su grupo familiar y demás supuestos fácticos de la reclamación

- JHON BAIRO GIRÓN MINA, titular con cédula de ciudadanía número 1.059.064.909 de Miranda (Cauca), a quién se podrá ubicar en el número telefónico de contacto 318 340 02 86.
- CLAUDIA PATRICIA PALACIOS MURILLO, identificada con cédula de ciudadanía número 25.529.479 de Miranda (Cauca), a quién se podrá ubicar en el número telefónico 316 736 60 10.
- JOSÉ HUMBERTO GIRÓN FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía número 4.661.756 de Padilla (Cauca), a quién se podrá ubicar en el número telefónico 304 355 99 54.
- GABRIELA ZÚÑIGA MAYA, portadora de la cédula de ciudadanía número 1.002.808.632 de Padilla (Cauca), a quién se podrá ubicar en el número telefónico 318 721 70 03.

2.2.6. Solicitamos al H. Juez Sustanciador se sirva hacer comparecer a las siguientes personas, quienes depondrán sobre los supuestos fácticos OCTAVO al UNDÉCIMO del acápite HECHOS de este escrito demandatorio, en especial sobre los perjuicios derivados a Yeinson Estiven Baicue Mezú y a su grupo familiar y demás supuestos fácticos de la reclamación:

- STEFANNY ENITH CÁRDENAS MEZÚ, portadora de la cédula de ciudadanía número 1.114.892.446 de Florida (Valle), a quién se podrá ubicar en la calle 11 A Bis No. 9- 40 Miranda (Cauca), número telefónico de contacto 320 540 31 22.
- ISABELA ORTIZ DURANGO, identificada con cédula de ciudadanía número 1.007.147.863 de Florida (Valle), domiciliado en la carrera 9 No 11 A Bis- 16 Miranda (Cauca), número telefónico de contacto 318 399 24 76.
- CENOVIA BERNAL MOSQUERA, titular de la cédula de ciudadanía número 31.852.795 de Cali (Valle), residente en la carrera 9C No. 13- 45 Miranda (Cauca), número telefónico de contacto 318 720 76 40.
- MARÍA BIVIANA LUCUMÍ GRANOBLÉS, identificada con cédula de ciudadanía número 25.531.363 de Miranda (Cauca), a quién se podrá ubicar en la carrera 11 No. 12 Bis -52 Miranda (Cauca).
- ARBEY MEZÚ MOSQUERA, titular de la cédula de ciudadanía número 16.887.414 de Florida (Valle), a quién se podrá ubicar en la carrera 11 No. 12 Bis- 52 Miranda (Cauca).

2.2.7. Solicitamos al H. Juez Sustanciador se sirva hacer comparecer a las siguientes personas, quienes depondrán sobre los supuestos fácticos OCTAVO al UNDÉCIMO del acápite HECHOS de este escrito demandatorio, en especial sobre los perjuicios derivados a Sorayda Cándelo Capote y a su grupo familiar y demás supuestos fácticos de la reclamación

- MARÍA FERNANDA CUELLAR RÍOS, identificada con cédula de ciudadanía número 1.114.142.088 de Cali (Valle), a quien se podrá ubicar en la Calle 5 No. 2 Este- 15 - Santiago de Cali (Valle), correo electrónico mariafernandacuellar@gmail.com, número telefónico de contacto 321 214 80 91.
- MAIRA ALEJANDRA GUEVARA PALACIO portadora de la cédula de ciudadanía número 1.114.883.327 de Florida (Valle) domiciliado en la calle 11 B No. 4-53 Miranda (Cauca), correo electrónico mairitaaleja290490@gmail.com, número telefónico de contacto 319 554 82 82.
- CATHERINE RESTREPO titular de la cédula de ciudadanía número 38.568.019 de Cali- Valle, residente en la calle 6 No. 4-08 Miranda (Cauca), correo

electrónico catherinerestrepo84@gmail.com, número telefónico de contacto 316 886 00 82.

Atendiendo el domicilio de los citados deponentes citados en los numerales 2.2.1 al 2.2.7., pedimos respetuosamente al despacho de conocimiento ordene a la autoridad judicial que corresponda disponga de los medios tecnológicos que faciliten la práctica de la prueba, tal como lo indica el artículo 37 del Código General del Proceso en concordancia con lo reglado en el decreto legislativo 806 de 2020⁴⁶, ley 2080 de 2021 o en su defecto ordenará comisionar al señor Juez Civil Municipal de Miranda (Cauca), Juez Civil Municipal de Dagua y Juez Administrativo del Circuito de Santiago de Cali -Reparto-, respectivamente, para el desarrollo de las respectivas diligencias.

2.2.8. Solicitamos al H. Juez de conocimiento se sirva hacer comparecer a las siguientes personas, quienes depondrán sobre el estado psicológico/psiquiátrico de los demandantes, en especial los supuestos fácticos NOVENO y DÉCIMO del acápite HECHOS de la reclamación, así como harán el reconocimiento del material documental obrante en el expediente, de conformidad con el Código General del Proceso:

- Dr. FERNANDO MANCILLA PORTOCARRERO, titular de la cédula de ciudadanía No. 76.043.576 de Puerto Tejada, residente en la carrera 43 B No. 55-14 - Santiago de Cali, correo electrónico maclanil7@yahoo.com
- Dr. LUÍS ALFONSO GÓMEZ CAMPO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 14.997.516, quien se podrá citar en la calle 14 Norte No. 9 N- 25 Oficina 401 – Santiago de Cali, correo electrónico gocaluiso@gmail.com

Atendiendo el domicilio de los citados deponentes, pedimos respetuosamente al despacho de conocimiento ordene a la autoridad judicial que corresponda disponga de los medios tecnológicos que faciliten la práctica de la prueba, tal como lo indica el artículo 37 del Código General del Proceso en concordancia con lo reglado en el decreto legislativo 806 de 2020⁴⁷, ley 2080 de 2021 o en su defecto ordenará comisionar al señor Juez Administrativo

⁴⁶ Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

⁴⁷ Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

del Circuito de Santiago de Cali (Valle del Cauca), para el desarrollo de las respectivas diligencias.

2.2. INTERROGATORIO DE PARTE.

Atendiendo la posibilidad que permite el artículo 198 de la ley 1564 de 2012⁴⁸, pido respetuosamente al despacho se sirva disponer la citación de las siguientes personas, para

⁴⁸ El artículo 203 de la legislación adjetiva anterior consagró la figura del interrogatorio a instancia de parte, medio de prueba que consistía en que cualquiera de las partes podía pedir la citación de la contraria a efectos de interrogarla sobre hechos relacionados con la litis. Sin embargo, en la ley 1564 de 2012, bajo esta misma figura se permite la citación a instancia de cualquiera de las partes, aún de su mismo apoderado, desapareciendo la restricción en su petición, es decir que únicamente se hacía respecto de la parte contraria.

La declaración de la parte, por su manifiesto interés personal en el resultado favorable, históricamente ha estado en el centro de intensas polémicas. Se rechazó su confiabilidad respecto de los hechos que benefician al declarante, especialmente en el revaluado sistema probatorio del proceso esencialmente escrito, donde se limita la eficacia probatoria de la declaración de parte a la confesión y el juramento probatorio, estimatorio o deferido por la ley.

No obstante, los modernos sistemas que adoptan la victoriosa oralidad, entre ellos el del CGP, al acrecentar la inmediación y la libre valoración de las pruebas, engrandecen el significado principal del contacto personal e inmediato del juez con las partes y prácticamente sin excepción reconocen el vigor y la eficacia probatoria de la simple declaración de parte, obtenida en un interrogatorio libre que podrá ser ordenado por el juez en cualquier momento con fines aclaratorios o de clarificación, sin perjuicio del interrogatorio formal o de absolución de posiciones que tradicionalmente era el único que se practicaba, a solicitud de los litigantes, con miras a obtener la confesión de la contraparte. CANOSA Suárez, Ulises. "Código General del Proceso. Aspectos Probatorios" en XXXIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Universidad Libre. Bogotá D.C. – Colombia. Primera Edición - Septiembre 2012.

En este sentido el H. Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, con ponencia de la Dra. Zoranny Castillo en auto interlocutorio 396 del 11 de diciembre de 2018 dentro del proceso radicado bajo el número 7600013333016201700069, Demandante: Andrés Perea Hurtado, Demandado Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, sostuvo: ***Así entonces, sobre la procedencia del decreto de la prueba el despacho revocará la decisión considerando que, si bien es cierto del enunciado inicial del artículo 184 del CGP transcrito podría inferirse que solo puede citarse a interrogatorio a la contraparte, lo cierto es que de la totalidad del capítulo que regula la práctica, y finalidad de la prueba se infiere que ella no está limitada a tal evento; el hecho de que la confesión en materia contenciosa no esté proscrita, excepto para los representantes legales de las entidades públicas por expresa disposición del artículo 195 ob. cit., permite colegir que nada impide que la propia parte pida su interrogatorio y asuma sus efectos en caso de que se den los requisitos del artículo 191 ídem para que se tenga como hecho confesado.***

Lo anterior, aunque parezca ilógico, encuentra fundamentos en que el proceso oral por audiencias en donde se privilegia el principio de inmediación de la prueba, permite con el interrogatorio de parte, en el cual incluso se puede hacer diligencia de reconocimiento de documentos provocar confesión, etc. que el Juez y la propia contraparte se haga una mejor idea de la teoría de caso de la parte interesada autocitante provoque un ejercicio de contradicción de la prueba de mayor complejidad y por ende un despliegue de mejor manera el derecho a la defensa incluso tiene un efecto psicológico en el debate al poder conocer el sentir y como lo expresa la parte interesada. (Negrilla fuera de texto)

En otra decisión de la misma Corporación, auto interlocutorio 258 del 16 de octubre de 2020, proceso 7600133 33 019 2018 00304, con ponencia de Eduardo Antonio Lubo Barros se ratificó la tesis que el interrogatorio de parte puede ser solicitado por cualquiera de quienes actúan como parte en el proceso. Arguyó que "El propósito esencial del interrogatorio es permitir que las partes presenten su versión acerca de los hechos que interesan al proceso y que no siempre a través de este se va generar la confesión...

El profesor Hernán Fabio López Blanco en su libro CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – PRUEBAS, al respecto adujo (página 186): (...) Así las cosas, es viable que la misma parte solicite que se le reciba la declaración de parte, prueba que estará sometida a los requisitos previstos en el artículo 202 del CGP.

(...)

Pues bien, este Despacho itera que el interrogatorio, en los términos en que se encuentra consagrado en el artículo 198 del C.G.P, puede ser solicitado por cualquiera de quienes actúan como parte en el proceso, indistintamente de

56

que comparezcan a rendir declaración sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que resultó lesionado, los perjuicios sufridos en especial los supuestos fácticos CUATRO QUINTO, SEPTIMO al UNDÉCIMO, del acápite HECHOS de la reclamación, así como absolverán otros interrogantes que surjan en el momento de la diligencia.

- MARISELA SOTO, identificada con cédula de ciudadanía número 31.627.151 de Florida.
- JOSÉ RAÚL PARRA MURILLO, titular de la cédula de ciudadanía número 16.883.286 de Florida.
- CLAUDIA JOHANNA POSSO MEJÍA, portadora de la cédula de ciudadanía número 1.112.224.192 de Pradera.
- SANDRA PATRICIA MAYA MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 25.389.834 de Padilla.
- YEINSON ESTIVEN BAICUE MEZÚ, titular de la cédula de ciudadanía número 1.114.900.648 de Florida.
- SORAYDA CANDELO CAPOTE, portadora de la cédula de ciudadanía número 25.528.007 de Miranda.

A los mencionados se les podrá citar por intermedio de los suscritos apoderados en la calle 11 No. 6-40 – Santiago de Cali, o a través de los correos electrónicos henry-bryon@outlook.es, fernandoyepes@yepesgomezabogado.com

Atendiendo el domicilio de los relacionados, pedimos respetuosamente al despacho de conocimiento ordene a la autoridad judicial que corresponda disponga de los medios tecnológicos que faciliten la práctica de la prueba, tal como lo indica el artículo 37 del Código General del Proceso en concordancia con lo reglado en el decreto legislativo 806 de 2020⁴⁹, ley 2080 de 2021 o en su defecto ordenará comisionar al señor Juez Civil Municipal de Miranda (Cauca), para el desarrollo de las respectivas diligencias.

que sea la contraparte quien lo haga. No obstante, no debe dejarse de lado el análisis de la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba solicitada. (...)

El relato que éste haga respecto a las circunstancias en las que ocurrió el suceso generador de la reclamación, junto con las demás pruebas decretadas, permitirá esclarecer la controversia planteada.

⁴⁹ Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

2.4. PRUEBA PERICIAL.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 el artículo 212 de la ley 1437 de 2011⁵⁰, solicitamos al H. Juez de Conocimiento que una vez allegadas las historias clínicas requeridas se sirva ordenar la siguiente pericia, encaminada a demostrar el daño alegado, en especial sobre los supuestos OCTAVO al DÉCIMO del acápite HECHOS de este escrito demandatorio:

2.4.1. Remitir a (i) Marisela Soto identificada con cédula de ciudadanía número 31.627.151 de Florida, (ii) José Raúl Parra Murillo titular de la cédula de ciudadanía número 16.883.286 de Florida, (iii) Claudia Johanna Posso Mejía portadora de la cédula de ciudadanía número 1.112.224.192 de Pradera. (iv) Sandra Patricia Maya Martínez, identificada con cédula de ciudadanía número 25.389.834 de Padilla, (v) Yeinson Estiven Baicue Mezú, titular de la cédula de ciudadanía número 1.114.900.648 de Florida y (vi) Sorayda Candelo Capote portadora de la cédula de ciudadanía número 25.528.007 de Miranda, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Popayán; para que le sea practicado un reconocimiento médico y se sirvan determinar el tiempo de incapacidad y las secuelas a que hubiera lugar aclarando si son de carácter permanente o transitorias, como consecuencia de las afecciones físicas y perturbaciones psicológicas/psiquiátricas, derivadas del evento ocurrido en marzo del año dos mil diecinueve (2019).

2.4.2. Remitir a (i) Marisela Soto identificada con cédula de ciudadanía número 31.627.151 de Florida, (ii) José Raúl Parra Murillo titular de la cédula de ciudadanía número 16.883.286 de Florida, (iii) Claudia Johanna Posso Mejía portadora de la cédula de ciudadanía número 1.112.224.192 de Pradera. (iv) Sandra Patricia Maya Martínez, identificada con cédula de ciudadanía número 25.389.834 de Padilla, (v) Yeinson Estiven Baicue Mezú, titular de la cédula de ciudadanía número 1.114.900.648 de Florida y (vi) Sorayda Candelo Capote, , portadora de la cédula de ciudadanía número 25.528.007 de Miranda, a la Junta Regional de Calificación del Valle del Cauca – Ministerio de Protección Social del Valle del Cauca, ubicada en la Calle 5 E No. 42A 05 – Santiago de Cali, para que le sea practicado un reconocimiento y se sirvan determinar la pérdida de su capacidad laboral como consecuencia de las lesiones físicas y perturbaciones psicológicas/psiquiátricas derivadas del suceso de marzo del año dos mil diecinueve (2019).

⁵⁰ Las **partes podrán presentar** los **dictámenes periciales** necesarios para probar su derecho, o **podrán solicitar la designación de perito**, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas. (Resaltado fuera de texto).

OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

Con fundamento en el artículo 164 numeral 2 literal i de la ley 1437 de 2011, nos encontramos dentro del término para instaurar la demanda de Reparación Directa.

Téngase en cuenta que habiéndose presentado la solicitud de convocatoria a conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Judicial delegada ante la jurisdicción contencioso administrativa el día diecinueve (19) del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), la oportunidad del medio de control se suspendió hasta el día veintiuno (21) del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021), fecha en que se declaró fallida la conciliación, reanudándose el término de caducidad de conformidad con lo regulado en el artículo 9 del decreto legislativo 491 de marzo de 2020.

CUANTÍA

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 157 de la ley 1437 de 2011, que indica que la cuantía se determinará, tratándose de varias pretensiones; por el valor de la pretensión mayor, nos permitimos estimar razonadamente la cuantía en la suma de setenta millones de pesos m/cte. (\$70.000.000), correspondientes al “perjuicio material”, en la modalidad de lucro cesante⁵¹ a favor de la reclamante Marisela Soto.

La anterior cuantía deberá tomarse en consideración para todos los efectos legales.

⁵¹ Conforme posición del Consejo de Estado en auto interlocutorio del día diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), al darle un entendido al artículo 157 de la ley 1437, **se debe desechar, a efectos de estimar la cuantía, los pedimentos por concepto de perjuicios inmateriales, esto es, perjuicios morales, por violación de derechos humanos, daño fisiológico, daño a la vida de relación y alteración a las condiciones, por lo tanto la base objetiva para determinar la cuantía del asunto está dada por los perjuicios materiales. Discurrió la Corporación: “La Sala debe interpretar el artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, que se encarga de reseñar las reglas que se deben observar a fin de estimar la cuantía cuando sea este el criterio preponderante a la hora de identificar el Juez competente, (...) Según esta disposición la competencia por razón de la cuantía se determina en primer lugar i) por el valor de la multa o de los perjuicios causados. Entiéndase que en la determinación de tal monto el accionante sólo debe considerar aquellos que sean de orden material, pues los demás, cobijados dentro de la categoría de los perjuicios inmateriales, deben ser excluidos de tal raciocinio. Lo anterior, en tanto que la disposición indica: “sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales”. Para llegar a esta conclusión, la Sala precisa que la calificación que hizo el legislador, de excluir los perjuicios morales, se debe interpretar en un sentido extensivo, lo que supone no solo atenerse a lo expresado por dicho rubro en específico sino que cobija también todos aquellos perjuicios que han sido considerados como pertenecientes a la categoría de los inmateriales, pues la finalidad de tal disposición ha sido la de dar relevancia a los perjuicios materiales por ser estos un referente objetivo y preciso de fácil comprobación prima facie”. (Énfasis nuestro) Sección Tercera, Subsección C, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación número: 11001-03-26-000-2012-00078-00(45679), actor: José Álvaro Torres y otros, demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.**

COMPETENCIA

Por haber ocurrido los hechos en jurisdicción del municipio de Miranda (Cauca), de conformidad con la cuantía establecida, lo es competente el Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, como lo indica el numeral 6 del artículo 156 de la ley 1437 de 2011 y el Acuerdo 3321 de 2006⁵².

ANEXOS DE LA DEMANDA

Nos permitimos aportar con el libelo de la demanda los documentos señalados en el acápite de RELACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS.

PETICIÓN DE RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA ADJETIVA

Atendiendo los mandatos aportados, solicitamos al H. Despacho reconocernos personería como apoderados de la parte actora, tal como lo permite el Código General del Proceso.

Téngase presente señor Juez de conocimiento que varios poderes agregados cuentan con la presentación personal ante Notario Público según lo indica la ley 1564 de 2012⁵³, y otros fueron otorgados conforme lo indica el Decreto 806 de 2020⁵⁴, que fueron remitidos de manera grupal por los correos electrónicos creados por algunos de los miembros de la comunidad reclamante que han logrado tener acceso a medios tecnológicos.

⁵² Expedido por el Consejo Superior de la Judicatura "Por el cual se crean los circuitos judiciales administrativos en el territorio nacional".

⁵³ "Artículo 73. Derecho de postulación. Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.

Artículo 74. Poderes. ...El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.

...El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas.

⁵⁴ "Artículo 5. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento....

NOTIFICACIONES

Los apoderados de la parte demandante

Edificio Banco Tequendama - Calle 11 No. 6 – 40 Oficinas 503, 504 - Santiago de Cali,

Teléfono (032) 888 2767, 312 259 78 03 - 310 377 1203,

Correos electrónicos: feyego@yahoo.com,

henry-bryon@outlook.es

fernandoyepes@yepesgomezabogados.com

La parte demandante

Por intermedio de los suscritos apoderados

Las entidades demandadas

Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por conducto del señor Ministro de Defensa Dr. Diego Molano, funcionario con sede en Bogotá o por conducto del

Comandante de la Policía del Cauca, ubicado en la Avenida Panamericana 1N – 75 - Popayán – Cauca,

Correo electrónico: decau.notificacion@policia.govco

Municipio de Miranda, por conducto del señor Alcalde Municipal, con sede en Calle 7 No. 8-75 de esa localidad

Correo electrónico notificacionjudicial@miranda-cauca.gov.co

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

En la carrera 7 No. 75-66 Bogotá, teléfono (031) 255 8955,

Correo electrónico: procesos@defensajuridica.gov.co

Atentamente;



HENRY BRYON IBÁÑEZ

C.C. No. 16.588.459 de Cali

T.P. No. 68.873 del C.S.J.

FERNANDO YEPES GÓMEZ

C.C. No. 94.417.378 de Cali

T.P. No. 102.358 del C.S.J.